



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

COLEGIO DE HISTORIA

**Activismo político y delincuencia en las Casas de
Estudiantes de Provincia a finales de los años setenta**

Tesis

Que para obtener el título de

Licenciado en Historia

presenta:

Misael Armando Martínez Ranero

Asesora de tesis:

Dra. Beatriz Urías Horcasitas



Ciudad de México

Marzo 2016



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos

En primer lugar quiero agradecer a mi asesora de tesis, la Dra. Beatriz Urías, ella me orientó y acompañó a lo largo de este complicado proyecto. Sin su apoyo este trabajo no hubiera sido posible; su calidad humana y profesional reafirman el cliché: es una excelente investigadora pero es mejor persona.

No menos importante fue el aporte de mis lectores de tesis: el Dr. Javier Rico Moreno, el Mtro. Eric Nava, la Mtra. Denisse Cejudo y el Lic. Gustavo Martínez. A ellos muchas gracias por su lectura sesuda y por sus observaciones atinadas; desde luego que sus comentarios enriquecieron mi texto y ampliaron mi perspectiva sobre el tema.

Agradezco también a Sergio Ranero, a Walter Martínez y a Araceli Puanta, su lectura desinteresada sirvió de desahogo en momentos de confusión y me ayudó a ordenar las ideas y las palabras cuando no hallaba el camino.

A todos ellos los hago partícipes de los aciertos pero los eximo de los yerros que esta tesis pueda tener.

Agradezco a mis padres, Verónica y Claudio, por ser mi soporte y mi ejemplo a seguir, les debo más que la vida y les estaré eternamente agradecido. A mis hermanos, Karen y Carlos, cada uno con sus virtudes y sus modos, sin duda son los mejores que podría tener, los amo. A mi tía Alejandra por su aprecio y su valioso apoyo. A Enriquito y a Sergio por su compañía y los momentos felices, que no han sido pocos. A mis tíos, primos y a toda mi familia por su unidad y por todas las muestras de cariño.

Muchas gracias a mis amigos, Armando, Aarón, Héctor, Memo, Liliana e Itzel, y a todas las personas *especiales* que han sido parte de mi vida. Porque de una u otra forma me han brindado su afecto en las buenas, en las malas y en las más malas. ¡Gracias por todas las alegrías!

Mi más sincero agradecimiento para el personal del AGN y de la HNDM, el trato y las atenciones que tienen con los usuarios sin duda están a la altura de la calidad de la información que resguardan.

Y finalmente, un agradecimiento especial para los actuales habitantes de la Casa del Estudiante Duranguense, el tiempo que dedicaron para escucharme y compartir anécdotas fue muy valioso en la elaboración de mi tesis.

Espero, con este trabajo, poder retribuir aunque sea un ápice de todo lo que la UNAM me brindó como estudiante. “Por mi raza hablará el espíritu”

Activismo político y delincuencia en las Casas de Estudiantes de Provincia a finales de los años setenta

Índice

Introducción.....	2
Capítulo 1. Contexto histórico.....	11
1.1. Plano económico.....	11
1.2. Plano político.....	19
1.3. Plano social.....	34
Capítulo 2. Activismo estudiantil.....	40
2.1. Del interior de la República a la capital.....	40
2.2. Marchas y mítines en la articulación de una lucha política.....	44
2.3. Las CEP en contra del Patronato y las becas individuales.....	50
2.4. Conflicto de intereses: las CEP como instrumento político.....	55
Capítulo 3. La imagen de las CEP.....	60
3.1. El discurso: burgueses contra proletarios.....	60
3.2. El carácter delictivo de las CEP.....	64
3.3. La opinión pública: ¿Albergues de estudiantes o refugios de delincuentes?.....	69
Conclusiones.....	78
Bibliografía.....	82

Introducción

Los agnósticos dirían que fue “por azares del destino”, los creyentes hablarían de “los inescrutables caminos del Señor”, lo cierto es que la casualidad y su también desdeñada compañera, la curiosidad, me trajeron hasta aquí. La casualidad me puso ante el tema de las Casas de Estudiantes de Provincia (CEP), mientras que la curiosidad me llevó a profundizar en él. Investigaba la historia de la colonia Santa María la Ribera cuando me percaté de que en ella se establecieron por lo menos tres CEP;¹ lo que llamó mi atención no fue la cantidad —que bien puede explicarse por la ubicación de la colonia y su cercanía con el Casco de Santo Tomás—, sino las referencias delictivas que de dichas Casas se desprendían.

En efecto, la delincuencia fue la anomalía que despertó mi interés por las CEP, ¿por qué fue posible que dentro de los inmuebles pensados para el apoyo del desarrollo académico se generara toda la violencia reportada por la prensa y comentada por la sociedad? Esa pregunta guiaría mi investigación, y mientras intentaba responderla, fui conociendo una parte oscura de la política y de la juventud mexicana: los grupos porriles.

Como se hace en estos casos, lo primero fue localizar lo que se había escrito sobre el tema, mi sorpresa no sería menor cuando descubrí la notable carencia de trabajos relacionados con las CEP. La revisión bibliográfica arrojó únicamente un escrito publicado en 2008 por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (CONECULTA) dedicado a la Casa del Estudiante Chiapaneco; un texto inédito relacionado con la Casa del Estudiante Duranguense que se elaboró en 2014, y un par de trabajos referentes a dos proyectos similares a las CEP (la Casa Nacional del Estudiante y la Casa del Estudiante Indígena respectivamente).

La obra que aborda el tema de la Casa del Estudiante Chiapaneco se titula *Vida de estudiantes* y fue escrita por Amir Gómez León, ex habitante de dicho

¹ La Casa del Estudiante Sinaloense, la Casa del Estudiante Chiapaneco y la Casa del Estudiante Duranguense.

inmueble. En palabras del autor, su texto “es un testimonio de la vida real, que ilustra el papel que jugaron las casas de estudiantes en la Ciudad de México, como formadoras del carácter de los mismos”. Gómez León agrega: “es la historia de una institución civil, creada para jóvenes de escasos recursos económicos, que supieron aprovechar una coyuntura social y política inesperada, que transformó la vida de quienes vivieron en ella, y en muchos casos, la de sus familiares y hermanos”.²

Como el mismo autor señala, la información contenida en el libro es de carácter empírico, la fuente primordial son sus vivencias y sólo en contadas ocasiones recurre al dato duro. La carga emocional con que relata los hechos, incluso con un dejo de nostalgia, es notoria, y su texto cuenta con más de un comentario enriquecedor en lo que a conductas, posturas y experiencias de los estudiantes se refiere. La obra está escrita a manera de novela, a menudo centrada en lo anecdótico, y hay en ella información relevante para la elaboración de un texto académico si se utiliza con las debidas precauciones, sobre todo si se toma en cuenta que fue elaborada por un testigo presencial.

El texto dedicado a la Casa del Estudiante Duranguense fue escrito por uno de sus fundadores, Leonardo Saucedo Bonilla. Se terminó de redactar en el año de 2014 y tuve la oportunidad de leerlo gracias al apoyo de los actuales habitantes de la Casa. Tal como ocurre con el trabajo de Amir Gómez León, el manuscrito de Leonardo Saucedo es rico en anécdotas, rememora situaciones muy puntuales que solamente pueden ser referidas por quienes las vivieron, en este caso, por quienes las gozaron y padecieron.³

A través de sus páginas, el autor nos va transportando por las distintas etapas que ha experimentado el inmueble, desde su apertura oficial el 23 de junio de 1952 y llegando prácticamente hasta nuestros días. Si bien el texto proporciona

² Amir Gómez León, “Vida de estudiantes”, [en línea], PDF, p. 11.

³ Leonardo Saucedo Bonilla, *La Casa del Estudiante Duranguense en la ciudad de México*.

los nombres de las figuras públicas que de una u otra manera han fomentado la manutención de la Casa, a mi entender, el mayor aporte se encuentra en la narración descriptiva de algunos usos y costumbres de los habitantes del lugar.

La carencia de trabajos relacionados con este tema de estudio justifica en buena medida su pertinencia. Sin embargo, esa misma carencia se tradujo en ausencia de información y falta de referentes, de modo tal que tuve que ir construyendo el entorno de las CEP a partir de los reportes de las Investigaciones Políticas y Sociales (IPS),⁴ ubicados en la Galería 2 del Archivo General de la Nación (AGN), y con base en las notas periodísticas del diario *Avance* que consulté en la Hemeroteca Nacional Digital de México. Dichos documentos constituyeron las fuentes primarias de mi investigación, pero no fueron las únicas. Me apoyé también en otras fuentes hemerográficas y, si bien no registré una entrevista como tal, incluí información que obtuve o que pude inferir de conversaciones que sostuve con habitantes actuales de la Casa del Estudiante Duranguense, ex habitantes, y vecinos de ésta y de otras Casas; sin duda un aporte importante de la memoria colectiva en la conformación del tema.

Desde el inicio había decidido no centrarme en el establecimiento ni en la conformación de las Casas, me interesaba más bien estudiar cuáles eran algunas de las conductas de sus habitantes para intentar comprender y explicar la forma en que evolucionaron. En ese sentido, la información que encontré me daría la razón, poco o nada había relacionado con fechas de fundación, número de Casas habilitadas, registros de los residentes o demás datos cuantitativos que permitieran armar una genealogía de las CEP como instituciones.⁵

Consciente de que ese tipo de apuntes podría constituir un punto de partida

⁴ Cabe adelantar que toda la información obtenida del AGN pertenece al Fondo SEGOB-IPS, por lo tanto, el personal de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) fue el encargado de elaborar los reportes de los sucesos que habré de analizar.

⁵ La ausencia de ese tipo de información es quizá la deuda más grande de esta tesis con sus posibles lectores. Cabe aclarar que la no inclusión de la misma responde a que no logré conseguirla, no por omisión.

sólido, debí prescindir de ellos cuando no tuve alternativa y me enfoqué en el análisis de la participación política⁶ y de la propagación de la violencia en las Casas. Así, comencé a analizar el papel que desempeñaron las CEP en el plano político y social en el período que comprende de 1975 a 1980, poniendo énfasis en la imagen que sus habitantes defendían y en la imagen que la opinión pública les confería.⁷ Si bien las CEP surgen desde la primera mitad del siglo XX, sería en el período mencionado cuando se mostraron más participativas en calles y escuelas —sobre todo ante la imposición de las becas individuales y el posible cierre de las Casas—. Asimismo, en la década de los setenta, el índice delictivo relacionado con las CEP se encontraba en uno de sus puntos más altos, lo cual, aunado a las condiciones gubernamentales del país, terminó marcando un momento crucial en la historia de dichos espacios.

Evidentemente, al tratarse de luchas estudiantiles el movimiento del 68 se convirtió en referente obligado.⁸ El conflicto estudiantado-gobierno llegó a su punto más álgido la noche del 2 de octubre de 1968, momento que sentó un precedente en el accionar del Estado. A partir de entonces, los participantes tuvieron que modificar su organización, posturas y peticiones, pero principalmente, la forma en que se conducían.

Por una parte, los acontecimientos de Tlatelolco acentuaron la importancia de la unidad en las protestas sociales. Bajo el lema “unidos venceremos”, los grupos en pugna entendieron que el mantenerse juntos y sumar nuevas causas a su lucha

⁶ Por “participación política” debe entenderse: “En terminología corriente de la ciencia política la expresión participación política se utiliza generalmente para designar toda una serie de actividades: el acto del voto, la militancia en un partido político, la participación en manifestaciones, la contribución dada a una cierta agrupación política, la discusión de sucesos políticos... la presión ejercida sobre un dirigente político, la difusión de información política, etc.”, en Norberto Bobbio, *Diccionario de política*, p. 1137.

⁷ Basándome en Bobbio partiré de que la opinión pública “en cuanto ‘opinión’ siempre es opinable, cambia con el tiempo y puede ser objeto de disensión: de hecho, expresa más juicios de valor que juicios de hecho, que pertenecen a la ciencia y a los expertos. En cuanto ‘pública’, o lo que es lo mismo perteneciente al ámbito o al universal político, habría que hablar de opiniones en plural, porque en el universo político no hay espacio para una sola verdad política, para una epistemocracia”, en Norberto Bobbio, *Diccionario de política*, p. 1075.

⁸ Por el momento bastará con una breve referencia del movimiento estudiantil del 68, tema que habré de retomar cuando aborde los antecedentes históricos.

era la fórmula para evitar un posible atropello del régimen. Por otro lado, el gobierno aceptó el reto de proceder con más tacto y mostrar otra cara ante las críticas, por lo menos en el discurso.⁹ Así, durante los años setenta, cuando aparecen las movilizaciones de los habitantes de las CEP en los reportes de las IPS, los estudiantes poseían una mayor capacidad de organización —en buena medida producto de la experiencia—, al tiempo que las autoridades afirmaban ser tolerantes ante las manifestaciones en turno.

El tema de las CEP puede ser examinado como parte de un fenómeno generacional, permite entrever las secuelas de otros conflictos estudiantiles y es un buen termómetro del ambiente político y social que se vivía en el país. En efecto, la generación que habitó las Casas dentro del período que comprende esta investigación, tuvo que hacer frente a la presión de las autoridades y lidiar con la criminalidad que se hacía notar en diversas zonas de la ciudad. Ambas situaciones repercutieron sin duda en las conductas de los miembros de las CEP, por más heterogéneas que éstas hayan sido.

Aun si las inconformidades que sacaban a los estudiantes a las calles afectaban únicamente sus intereses, una vez en la marcha las críticas dirigidas hacia el gobierno y sus medidas no se hacían esperar; como tampoco faltaban los gritos de aliento para las causas democráticas y revolucionarias en pie de lucha alrededor del mundo. Los estudiantes se mostraban muy participativos y hacían evidente su interés en el acontecer político. Figuras como Ernesto “el Che” Guevara y acontecimientos como la Revolución cubana estaban muy frescos en la memoria del estudiantado, por lo que constituyeron algunos de sus principales estandartes durante aquella época.

Impregnados de esa ideología, los estudiantes se asumieron como defensores de

⁹ Al respecto apunta Monsiváis: “entre las lecciones del 68 se incluye la necesidad de negociar, conceder, flexibilizarse”. *Vid.*, Carlos Monsiváis, “En virtud de las facultades que me han sido otorgadas...’ Notas sobre el presidencialismo a partir de 1968”, en Ilan Semo et al., *La transición interrumpida: México 1968-1988*, p. 117.

las luchas populares, luchas que debieron librar junto a obreros y campesinos pero sin apoyo del resto de la población. Incluso, con base en las fuentes revisadas, es más factible suponer la existencia de la desaprobación y del temor por parte de la ciudadanía hacia los habitantes de las CEP antes que simpatía y apoyo para sus causas.

No era novedad que el Estado contara con los medios necesarios para manejar a conveniencia las eventualidades; sin embargo, como lo ha sostenido Alan Knight, ni el régimen fue tan controlador como se asume, ni la sociedad tan inerte.¹⁰ El discurso oficial y la prensa (más allá de las publicaciones de oposición) significaron una doble ventaja para el gobierno: protegían su imagen y defendían su postura al tiempo que criticaban y demeritaban a los grupos opositores. El régimen, mediante el manejo del estereotipo del joven como “rebelde sin causa”, simplificó la labor de desprestigio hacia los movimientos estudiantiles y restó valor a sus argumentos. Esta situación no es exclusiva del período que se estudiará, Ariel Rodríguez Kuri la caracteriza acertadamente basándose en el conflicto del 68:

Los partícipes del movimiento conservador tienden a interpretar la protesta estudiantil sólo como un acto de indisciplina política y social, y no la consideran en ningún momento como un ejercicio de derechos constitucionales (políticos, cívicos) de los estudiantes y sus aliados. En fin, la corriente conservadora recurre a dos operaciones típicas: la denuncia de influencias externas en la protesta (de comunistas, de imperialistas, de priistas resentidos) y la exhibición de los jóvenes como la prueba viviente del fracaso del orden moderno en México.¹¹

¹⁰ Reforzando esa idea, el mismo Knight comenta que “el Estado mexicano fue menos poderoso y menos dominante, incluso en los años de su apogeo (1940-1965), y que la sociedad civil fue menos dócil y menos dispuesta”. Por más que a lo largo de la tesis destaque las facultades coercitivas del Estado, opto por una postura equilibrada sobre el tema, entendiendo que, si bien fue capaz de controlar y encauzar ciertas situaciones, no debe asumirse que se tenía todo plenamente calculado. *Vid.*, Alan Knight, *Repensar la Revolución Mexicana*, p. 498.

¹¹ Resulta interesante apreciar el comportamiento social que Rodríguez Kuri examina en su texto. Contrario a lo que suele suponerse, el autor muestra a una parte de la sociedad mexicana que apoyó enérgicamente las medidas empleadas por el gobierno para frenar el movimiento estudiantil del 68. Si se considera que, incluso durante ese período tan crítico de nuestra historia hubo pronunciamientos a favor del Estado, aún más lógico será ver y entender el uso de la opinión pública en contra de las CEP. *Vid.*, Ariel Rodríguez Kuri, “El lado oscuro de la luna. El momento conservador en 1968”, en Erika Pani (coordinadora), *Conservadurismo y derechas en la historia de México*, p. 524.

Aunque sería un error adjudicar únicamente a las autoridades la adopción de dichas posturas, puesto que, a su manera, los estudiantes también recurrieron a la esquematización y a la crítica a ultranza.

El manejo de grupos estudiantiles con fines políticos fue una práctica que ya se utilizaba antes del período analizado. El movimiento del 68 ayuda a ilustrar y a sentar un precedente de cierto tipo de prácticas que los miembros de las CEP reproducirían en el futuro. En el siguiente caso se pueden apreciar algunas de las facultades que adquirieron los dirigentes estudiantiles; el testimonio lo presentan Deborah Cohen y Lessie Jo Frazier: “La verdad es que yo hacía lo que quería. Seguía a la policía a las tres de la mañana, manejaba un camión, dirigí a 60 muchachos armados con palos para que protegieran a uno de los líderes del movimiento”.¹²

En efecto, el tipo de prácticas mencionadas en la cita anterior no fueron ajenas a los grupos porriles que se crearon al interior de las CEP en los años setenta. Lo que llama la atención es el hecho de que dichos grupos a menudo estuvieran manejados por el Estado, convirtiendo a las Casas en puntos de control que facilitaban la intervención directa de los gobiernos estatales y de los dirigentes políticos. Esta situación produjo una lucha de poder que perseguía la obtención del mando de las CEP y que fomentó, en buena medida, la propagación de violencia en las Casas y la práctica de conductas delictivas por una parte de sus habitantes.

Partiendo de lo que he adelantado, sostengo que las Casas de Estudiantes de Provincia no fueron meras instalaciones que daban albergue a los futuros profesionistas del país, sino espacios de convivencia y acción múltiple, algunas progubernamentales y otras opositoras, pero, en la mayoría de los casos, se mostraron políticamente activas. A la larga, las posturas adoptadas y los métodos

¹² Testimonio de Mariana, estudiante de la facultad de ciencias de la UNAM, en Cohen y Jo Frazier, “No sólo cocinábamos...’ Historia inédita de la otra mitad del 68”, en Ilan Semo et al., *La transición interrumpida: México 1968-1988*, p. 75.

utilizados por los miembros de las Casas los dotarían de una imagen contrastante con su objetivo primordial: estudiar.

Esta tesis se divide en tres capítulos. Para fundamentar la idea central de la investigación comenzaré por contextualizar el objeto de estudio, de modo tal que el primer capítulo se centrará en el análisis de las condiciones económicas, políticas y sociales que destacaron a nivel nacional durante la etapa que comprende de 1940 a 1980. Este capítulo permitirá rastrear los orígenes de algunos de los problemas que debieron enfrentar las CEP, lo que ayudará a comprender la evolución de sus demandas. El seguimiento de las luchas populares que anteceden al período estudiado pone en evidencia el control político del régimen, sus sistemas de negociación y sus métodos de represión, dando cuenta en todo momento de la restricción democrática que atravesaba el país. Mientras tanto, la exposición de las circunstancias económicas (que tendían a empeorar conforme se desvanecía el llamado “milagro mexicano”) y de las diferencias sociales (más allá del empuje y del florecimiento de la clase media) se sumarán a la lista de inconformidades que, de cierta manera, motivaron las manifestaciones de protesta de los habitantes de las Casas.

Una vez atendidas las causas, en el segundo capítulo se desglosará y analizará el desarrollo de las marchas y de los mítines organizados por los miembros de las CEP. En este punto resulta interesante apreciar el modo de acción multidireccional de los estudiantes, es decir, a diferencia de lo que podría suponerse, las Casas fueron un instrumento político que, si bien tuvo en el Estado a su principal antagonista, actuaron en diversos sentidos, persiguiendo beneficios de variada índole e incluso, en ocasiones, manejadas por el mismo gobierno. Para la década de los años setenta, las CEP sobrepasaban la centena de inmuebles habilitados en el Distrito Federal, contaban con un distinto número de integrantes, con diferentes normas de conducta, con sus propios problemas, con el respaldo de diversos organismos y de sus respectivos estados, empero, todas ellas tuvieron participación política.

Por último, en el tercer capítulo se abordarán las posturas ideológicas que defendieron los estudiantes en contraste con la imagen que de ellos generó la opinión pública. También se examinarán las consecuencias que debieron enfrentar los miembros de las Casas acorde con su comportamiento y que conducen a la pregunta final: las CEP ¿fueron albergues de estudiantes o refugio de delincuentes? Cualquiera que sea la respuesta a esta pregunta, lo que se pretende es abrir el debate en torno a la actuación del Estado frente a las luchas populares, en este caso, frente a las movilizaciones de los habitantes de las Casas.

El tema de los movimientos estudiantiles ha concentrado las miradas en los hechos violentos del 68 y del 71, pero encontró continuidad en las manifestaciones de las CEP a finales de los años setenta y en las huelgas de la UNAM y del IPN en 1999 y en 2014 respectivamente. Sería interesante realizar un análisis conjunto de dichos fenómenos para apreciar la evolución en el comportamiento tanto del estudiantado como de las autoridades, y ver también, qué beneficios se han conquistado y qué demandas siguen vigentes.¹³ Aunque, por más atractiva que me resulte la idea, no es lo que se persigue en esta tesis. Me sentiré satisfecho si logro despertar la curiosidad en algunos o servir de referente para otros que decidan aproximarse a este tema que la historiografía mexicana ha dejado en el olvido.

¹³ Como se sabe, y como explicaré en el plano político, el 68 fue un punto de referencia no sólo para los movimientos estudiantiles, sino para todo movimiento social en general. De tal manera que, partiendo del 68, puede apreciarse como el fenómeno de la organización estudiantil permeó, en varias ocasiones, en rubros ajenos a lo académico. Es decir, como se verá para el caso de algunos habitantes de las CEP, ser estudiantes fue sólo el pretexto para sus aspiraciones de clase y de posición política. Véase tema 2.4.

Capítulo 1. Contexto histórico

1.1. Plano económico

Francisco Javier Alejo propone una división de la economía nacional en tres períodos claramente distinguibles desde la perspectiva de los objetivos del desarrollo-evolución del énfasis del gasto público:

El primero —que antecede al periodo aquí estudiado— abarca de 1920 a 1940 y está caracterizado por el surgimiento del Estado interventor en tres direcciones: pacificar el país, crear instituciones y dar inicio a las obras de infraestructura.

El segundo período va de 1941 a 1958, durante el cual se hizo énfasis en el gasto directamente productivo y se acentuó el papel del gobierno como Estado interventor (o Estado benefactor). Se aumentó la tasa de crecimiento agrícola para estabilizar los precios internos, se ampliaron las exportaciones, se aceleró la industrialización (se aprecia un creciente número de empresas estatales como Altos Hornos, PEMEX y CFE). Finalmente, se concentró el gasto en las zonas urbanas a costa de la desatención del sector rural.

Al tercer período, comprendido entre 1959 y 1971, Francisco Javier Alejo lo define como un momento de diversificación del gasto público entre los distintos objetivos en respuesta a las demandas sociales largamente postergadas. Durante esta etapa aumentaron las presiones sobre el Estado en términos de la cantidad de peticiones por atender y de la complejidad de los procesos involucrados. Para entonces, eran ya evidentes tanto la ineficacia de las fuentes ordinarias de financiamiento así como la necesidad de programar nuevas medidas, dando paso en los años setenta a una crisis incipiente pero palpable, y a un entorno que denotaba malestar y desigualdad social.¹⁴

A partir de los años cuarenta México vivió un período de crecimiento económico sin precedentes. La nacionalización del petróleo en 1938 y la segunda Guerra Mundial fueron dos acontecimientos clave para la prosperidad nacional. El

¹⁴ Francisco Javier Alejo, "La política fiscal en el desarrollo económico de México", en Miguel Wionczek, (Comp.), *La sociedad mexicana: presente y futuro*, pp. 76-80.

primero por tratarse de un recurso altamente redituable y, el segundo, por dar lugar a la estrategia empleada por el Estado conocida como “sustitución de importaciones” (1940-1958). En efecto, durante la década de 1940, México se incorporó a la dinámica económica internacional¹⁵ y comenzó a obtener dividendos del exterior con un importante empuje en el período posbélico basado en la exportación de bienes y servicios, así como en la sustitución de importaciones. Todo ello bajo la protección del Estado que en ocasiones negaba los permisos de importación cuando un producto se fabricaba localmente, incluso sin considerar la diferencia de precios.

De este modo, se generó un proceso de estatización que consistió en la adquisición total de las empresas por parte del Estado o en la intervención del capital privado nacional en las mismas (se pedía que más del 50% de las acciones pertenecieran a mexicanos). El esfuerzo de industrialización nacional se fundamentó en el apoyo a los grupos empresariales locales y en la progresiva eliminación de la inversión privada extranjera, especialmente en sectores como las industrias extractivas, los servicios públicos, las comunicaciones y los transportes.¹⁶

Empero, al tiempo que se fomentaba el desarrollo interno, se contrajo una cuantiosa deuda externa. Incluso durante la década de 1960 se aparentó un equilibrio en las finanzas de México y un incremento en la reserva, sin embargo, esto no reflejaba una estructura “sana” de las transacciones corrientes, sino un nivel sostenido y creciente de endeudamiento público y de ingreso de capital privado extranjero. El problema fue que, recurriendo al crédito externo, se amplió

¹⁵ Al terminar la segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se afianzó como potencia internacional, el hecho de que las acciones bélicas no afectaran mayormente su territorio fue un factor determinante para su despegar económico. De este modo, el país norteamericano dictaría las nuevas reglas a seguir y, sustentados en las nociones *keynesianas*, los estadounidenses consolidaron el principio de intervención del Estado en las economías. *Vid.*, María Eugenia Romero Sotelo, “La retórica de la economía 1958-1970: del desarrollo equilibrado el desarrollo estabilizador”, en María Eugenia Romero Sotelo (Coord.), *Fundamentos de la política económica en México: 1910-2010*, p. 250.

¹⁶ Miguel Wionczek, “La inversión extranjera privada: problemas y perspectivas”, en Miguel Wionczek (Comp.), *La sociedad mexicana: presente y futuro*, p. 136.

el desajuste en la balanza de pagos debido a que los servicios por los que se contrajo la deuda crecieron más rápido que los mismos ingresos.¹⁷

Aun destacando la situación económica del país dentro de lo que se conoció como el “milagro mexicano” (1940-1970) —etapa en la que se llegó a crecer más del 6% en el promedio anual del PIB, más que cualquier otro país en vías de desarrollo—, lo cierto es que las medidas gubernamentales distaron mucho de ser las idóneas para encauzar equitativamente dicho crecimiento. Durante ese período, la agricultura, el turismo y las exportaciones fueron los pilares de la economía nacional, áreas en las que —de acuerdo con los autores revisados— el problema no fue la desatención, sino más bien, una mala dirección.

La industrialización, por su parte, fomentó la concentración poblacional en las grandes urbes, hecho que se reflejó en el crecimiento sesgado en no más de 10 ciudades a lo largo de todo el país. En lo que a la urbanización respecta, según Diane Davis, fue durante la administración de Miguel Alemán (1946-1952) cuando el partido oficial asumió el compromiso con dicha política, misma que configuró en gran medida el derrotero del país.¹⁸

El Estado apostó por el desarrollo urbano como uno de los pilares de su economía, el empuje urbanizador fomentado desde los años cuarenta provocó importantes desigualdades sociales entre los habitantes del campo y los habitantes de la ciudad. Dicha urbanización no sólo acarrió problemas para el desatendido sector rural, sino que las mismas ciudades tuvieron que lidiar con los conflictos producto de la sobrepoblación y de un crecimiento carente de planeación.

Para Gustavo Garza “la alta concentración demográfico-económica en una ciudad o región es una ley tendencial del modo de producción capitalista”.¹⁹ En este

¹⁷ Jorge Eduardo Navarrete, “Desequilibrio y dependencia: las relaciones económicas internacionales de México en los años setenta”, en Miguel Wionczek (Comp.), *La sociedad mexicana: presente y futuro*, p. 103.

¹⁸ Diane Davis, *El leviatán urbano. La ciudad de México en el siglo XX*, pp. 166-182.

¹⁹ Gustavo Garza Villarreal, *El proceso de industrialización en la ciudad de México, 1821-1970*, p. 43.

caso, la capital del país sería el punto medular para la industrialización, el centro político y económico de la nación con todas las ventajas y desventajas que ello conllevó. La infraestructura propia de la ciudad de México sería el imán perfecto para la concentración fabril, con el sistema ferroviario y el servicio eléctrico como catalizadores del proceso de industrialización.

Si se observa, las circunstancias estaban dadas para la centralización, el cambio en la estructura productiva a favor de las actividades que se desarrollaban en la ciudad (desplazando en parte a la agricultura y a la minería que se realizaban fuera de la capital), aunado a que la población se dirige hacia donde el capital se acumula y las condiciones son favorables. De este modo, el Distrito Federal superaba en número de habitantes a la suma de las seis siguientes ciudades, constituyendo sin duda un gran reto para las autoridades y dando cabida a un cúmulo de conflictos.²⁰

La infraestructura de la ciudad de México se vería rebasada por las necesidades de sus pobladores. En un principio, cuando los gobiernos priistas concentraron las inversiones nacionales y establecieron la base industrial en la capital, la ciudad era sinónimo de oportunidades, empleos, prosperidad y desarrollo urbano; años después, las deficiencias en los servicios públicos, producto de la desatención, se sumarían a las protestas que una parte de la población haría escuchar en las calles.

El problema fue la falta de planeación y la nula previsión por parte de las autoridades, se atendió aquello que económicamente pareciera más redituable y se dejaron de lado las consecuencias negativas que implicaba el crecimiento urbano a ultranza. La elevada concentración poblacional y la desatención social rebasaron la capacidad de respuesta del Estado; las medidas y los programas con que se pretendió encarrilar la urbanización resultaron inviables, carecían tanto de técnica como de metodología y los recursos para ello estaban sesgados. Los

²⁰ Gustavo Garza Villarreal, *La urbanización de México en el siglo XX*, p. 46. Estas cifras contrastan con los números que Gustavo Garza presenta para el año de 1930, fecha en la que el grado de urbanización era del 17.5%; se contaba con 45 ciudades y la población del país era eminentemente rural, *Cfr.*, pp. 25-34.

planes y leyes de desarrollo urbano serían así, una lista de buenas intenciones y nada más.²¹

En el caso de la agricultura, fue necesario solventar el desvío de la mano de obra hacia otros sectores laborales, principalmente hacia el industrial,²² y se tuvo que lidiar con el atraso tecnológico que implicó una producción limitada. Asimismo, al atraso tecnológico generalizado debe añadirse la carencia e inadecuada investigación científica y la escasez de opciones educativas, de tal manera que, mantener las condiciones en un estado de desarrollo constante y sostenido, se antojaba sumamente complicado a pesar de todos los indicadores positivos pregonados por los dirigentes del país durante “el milagro mexicano”.

En efecto, fueron muchas las muestras de progreso económico que los gobiernos priistas enarbolaron a lo largo de ese período; el ya mencionado crecimiento del PIB y la baja tasa de desempleo serían motivo de orgullo para los presidentes en turno, acompañados por un notable incremento en la población económicamente activa entre 1950 y 1960. No obstante, entre 1940 y 1970, México fue en términos generales un país que crecía pero que no se desarrollaba, y en el cual se acentuaba el desequilibrio económico existente entre las distintas regiones y entre las clases sociales.²³

De manera explícita, la política económica del Estado se concentró en el apoyo desmedido a las clases altas y medias, polarizando las finanzas y dejando a pocos con mucho y a muchos con poco. Incluso, durante los momentos apremiantes —como la segunda mitad de la década de los sesenta— la política era no gravar a los ricos con altos impuestos puesto que ellos eran la principal

²¹ *Ibid.*, Conclusiones.

²² Según Carlos Tello, entre 1935 y 1970 la población económicamente activa en labores agrícolas bajó del 67% al 46%; en este periodo en el que la contribución al PIB de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca disminuyó del 28% al 13%, y el aporte de la industria pasó del 28% al 40%. *Vid.*, Tello, Carlos. “Un intento de análisis de la distribución personal del ingreso”, en Miguel Wionczek (Comp.), *La sociedad mexicana: presente y futuro*, p. 210.

²³ *Ibid.*, p. 222.

fuente de los fondos de inversión, de tal modo que la carga tributaria se desplazó hacia las clases medias asalariadas.²⁴

La mayoría de los autores revisados coinciden en un punto: el crecimiento económico derivado del modelo de desarrollo mexicano fue real, el problema fundamental de dicho crecimiento residió en los patrones altamente inequitativos de la distribución de los ingresos. Las autoridades se centraron tanto en las medidas financieras que estaban dando buenos resultados que desatendieron el resto de los rubros. Así, en aras del crecimiento económico cuantitativo, se sacrificó la democracia política y, hasta cierto punto, el bienestar social.

El contexto de la llamada *Edad de Oro* del capitalismo que se fundamentó en las propuestas *keynesianas*²⁵ fue el escenario idóneo para el crecimiento financiero de México. Sin embargo, del mismo modo, cuando la crisis lógica del capitalismo golpeó a las economías mundiales en la segunda mitad de los años sesenta, arrastró consigo al crecimiento mexicano. Para entonces, la estrategia económica pactada en Bretton Woods²⁶ empezaba a desgastarse al tiempo que la *Edad de Oro* del capitalismo llegaba a su fin, y con ello, se desvanecía también el “milagro mexicano”.

En los años setenta confluyeron tanto el agotamiento del sistema capitalista a nivel mundial, como una serie de deficiencias y desatenciones que venían arrastrándose desde los sexenios anteriores. Ante la falta de previsión y con una errónea estrategia financiera, la situación económica del país se complicó en demasía. El crecimiento económico no logró sostenerse a la par del aumento

²⁴ David Barkin, “La persistencia de la pobreza en México: un análisis económico estructural”, en Miguel Wionczek (Comp.), *La sociedad mexicana: presente y futuro*, p. 191.

²⁵ Ideas que se desprenden de la obra *Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*, escrita por John Maynard Keynes en el año de 1936, y cuyos elementos básicos serían los siguientes: “el equilibrio con subempleo, la abolición de la Ley Say, la necesidad de promover la demanda recurriendo al gasto público, más allá del límite de los ingresos disponibles”, Romero Sotelo, *op. cit.*, p. 242.

²⁶ Durante el mes de julio de 1944 se llevó a cabo la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas en el complejo hotelero de Bretton Woods (E.U.). Según María Eugenia Romero, dicho evento tuvo “como principal objetivo poner en marcha un nuevo orden económico mundial y dar estabilidad a las transacciones comerciales a través de un sistema monetario internacional, con tipo de cambio fijo fundado en el dominio del dólar”. *Ibid.*, p. 250.

demográfico, y por ello, lo que se generaba no era suficiente para abastecer lo que se demandaba, situación que condujo a un deterioro palpable en la otrora pregonada estabilidad económica.

Tanto el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976) como el de su sucesor, José López Portillo (1976-1982), fueron etapas de transición, considerando que, comenta Elsa Gracida, “tuvo lugar el fin de un prolongado periodo de crecimiento y el descrédito de los cuerpos económicos hasta entonces dominantes”, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.²⁷ En el plano nacional, Luis Echeverría recibió un país en pleno retroceso económico. Las exportaciones disminuían mientras las importaciones se elevaban, al tiempo que se presentaba una notable decaída en el PIB y la deuda externa se disparaba.²⁸

En su momento, Luis Echeverría se presentó como el candidato idóneo para continuar con la línea financiera implementada durante los sexenios anteriores, razón, entre otras, por la que Díaz Ordaz se decantó por él. Sin embargo, desde su llegada al poder, Echeverría se mostró en contra de la política económica empleada con antelación. Así lo manifestó en su discurso de toma de protesta como presidente del país el día primero de diciembre de 1970: “Una cifra relativa por elevada y constante que sea, había dicho en esa oportunidad, no puede darnos el reflejo fiel de una comunidad. El verdadero desarrollo, añadió, se mide por la armonía del crecimiento, por el nivel real de la productividad, y por el grado de bienestar general de una Nación”.²⁹ Criticó también a quienes sostenían que “primero debemos crecer para luego repartir”³⁰ y pretendió equilibrar el desarrollo económico con la justicia social a través de un crecimiento con distribución.

²⁷ Elsa M Gracida, “La leyenda negra de los años setenta”, en María Eugenia Romero Sotelo (Coord.), *Fundamentos de la política económica en México: 1910-2010*, p. 336.

²⁸ Incluso, los datos que cita Elsa Gracida señalan que la deuda externa se incrementó más de cinco veces durante el sexenio de Echeverría (pasó de 3 762 millones en 1970 a 19 600 millones en 1976). Citado en Gracida op. cit., p. 389.

²⁹ Citado en Gracida, *op. cit.*, p. 375.

³⁰ *Idem.*

Aunque, quizás el mayor error que en materia económica podría reclamarse a Luis Echeverría sería la inexistente reforma tributaria.³¹ Echeverría dejó pasar la oportunidad de aplicar la reforma tributaria en 1972, la misma que hubiera aportado una cuantiosa suma de ingresos a las arcas de la nación. Cediendo a la presión de los empresarios, quienes incluso amenazaron con retirar sus inversiones del país, se optó por satisfacer las demandas de éstos por encima del bien común.³² A pesar de ello, el sexenio terminaría con la relación entre Estado y empresarios desgastada, y con un nuevo auge petrolero que correspondería al futuro presidente atender.

José López Portillo fue el jefe del Ejecutivo durante la segunda mitad de la década de los setenta. Si bien Luis Echeverría tomó en consideración el paso de López Portillo por la Secretaría de Hacienda al “candidatearlo”, lo cierto es que durante su mandato evidenció algunas deficiencias en el manejo de la política económica.³³ Situación para nada privativa de López Portillo pero que se vio acentuada por las condiciones en que quedó el país al término de su sexenio y por el final del “milagro mexicano”.

La reforma tributaria siguió sin ser prioridad para López Portillo quien optó por la “petrolización” de las finanzas públicas. Desde su llegada al poder identificó el “petróleo como eje del desarrollo del país”,³⁴ e incluso proclamó: “México, país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora (con) el petróleo en el otro extremo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia”.³⁵ Lamentablemente, la volatilidad de los precios del hidrocarburo y las vicisitudes mercantiles internacionales frenarían el auge que se llegó a presumir. En síntesis, el vaivén económico, más allá del optimismo generalizado y del estado financiero saludable que llegó a presentarse en el país, sirvió, como se

³¹ Inclusive Elsa Gracida lo califica como “el gran reclamo histórico” hacia el gobierno de Echeverría. *Ibid.*, p. 392.

³² *Ibid.*, pp. 386-388.

³³ *Ibid.*, pp. 393-400.

³⁴ *Ibid.*, p. 402.

³⁵ Discurso de José López Portillo en Gustavo de la Rosa, “Así nunca vamos a regresar al primer mundo”, en *sinembargo.mx*, [en línea], secc. opinión.

verá más adelante, para acentuar el desequilibrio existente entre las clases sociales y para fomentar la expansión de las clases medias.

Estableciendo un vínculo entre la economía y la política, es posible concluir que todo período de alternancia gubernamental implica cierta cautela por parte de funcionarios y empresarios. El ambiente de zozobra generado durante la fase electoral suele apaciguar las inversiones y los movimientos financieros.³⁶ La devaluación del peso y la nacionalización de la banca en el último año de gobierno de López Portillo fueron medidas tardías, frenadas en su momento por cuestiones electorales y cuyos resultados aún se discuten. De esa forma, durante la transición presidencial, las decisiones económicas se tomaron en función de factores ajenos a lo meramente financiero y se centraron en los beneficios políticos. En palabras de López Portillo: “Lo más importante en aquellos días de crisis era salvar la estructura política del país, lo cual se logró”.³⁷

Después de todo, la política y la economía están relacionadas y la una puede explicar o justificar a la otra; en este caso, Roger Hansen señaló que, “los esfuerzos tendientes a comprender los factores que han contribuido al milagro económico mexicano, conducen al examen del sistema político de México, puesto que es ahí donde se ha nutrido la semilla de su éxito económico”.³⁸ Es decir, la estabilidad política y los lineamientos gubernamentales en materia económica, conformaron un escenario favorable para la economía nacional.

1.2. Plano político

El control y la eficacia de los mecanismos que garantizaron la continuidad del llamado “partido único” quedaron de manifiesto a partir de su fundación en 1929. El grupo gobernante mostró su adaptabilidad ante las circunstancias cambiantes y, uniendo fuerzas o conciliando con los sectores más influyentes, fueron

³⁶ Citado en Gracida, *op. cit.*, p. 412.

³⁷ *Idem.*

³⁸ Roger Hansen, *La política del desarrollo mexicano*, pp. 8-9.

generando las condiciones para perpetuarse en el poder durante gran parte del siglo XX.

Durante el sexenio de Miguel Alemán (1946-1952), comenta Medina Peña, se optó por el endurecimiento gubernamental bajo tres líneas de acción: “eliminación de la izquierda del elemento oficial, control del movimiento obrero mediante lo que llegaría a conocerse como ‘el charrismo’, y concesiones al liderazgo sectorial del partido oficial”.³⁹

Bajo dichas líneas de acción, el jefe del Ejecutivo contaba con los medios necesarios para imponer sus disposiciones, incluso si sus pretensiones podían repercutir en parte importante de la población, según Barry Carr, “para Alemán, el sacrificio de una generación de trabajadores y campesinos era un precio módico por hacer el país materialmente fuerte, industrializado, modernizado y avanzado”.⁴⁰

Por su parte la clase trabajadora, que había sido organizada en grandes centrales desde finales de la década de los años veinte, era para entonces una facción política prominente. Las organizaciones obreras dieron cabida a los sindicatos y a importantes confederaciones como la CTM, la CROM y la CNC (fundadas en los años treinta), mismas que se integraron al partido oficial bajo una relación de mutua conveniencia. De tal forma que, a cambio de diversas concesiones, los dirigentes sindicales garantizaban el apoyo y los votos de sus agremiados a favor de los líderes políticos, obteniéndose ventajas en ambas cúpulas pero sin que los beneficios se filtraran hacia las partes bajas de la estructura.⁴¹

Dentro de ese contexto surge el “charrismo sindical”, mecanismo gubernamental empleado para instaurar el orden entre los trabajadores. Su origen se remonta al conflicto entre los líderes ferrocarrileros detonado por la devaluación monetaria de julio de 1948. Por un lado se encontraba Luis Gómez Z., quien, a decir del gobierno, era un dirigente “espurio” del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros

³⁹ Luis Medina Peña, *Civilismo y modernización del autoritarismo. 1940-1952*. pp. 1-2.

⁴⁰ Barry Carr, *La izquierda mexicana a través del siglo XX*, p. 152.

⁴¹ Mario Huacuja Mario y José Woldenberg, *Estado y lucha política en el México actual*, pp. 24-27.

de la República Mexicana (STFRM). Del otro lado estaba Jesús Díaz de León alias “el charro”, también líder ferrocarrilero pero con mayor afinidad al grupo en el poder.⁴²

En ese conflicto el proceder del gobierno marcó la pauta que habría de seguirse en situaciones similares. Se opuso a las decisiones del propio STFRM —que incluso llegó a determinar la suspensión de Díaz de León acusado de traición— y, valiéndose de tropas federales y policías, el 14 de octubre de 1948 tomaron los locales nacionales del sindicato y varias oficinas de dicha dependencia en el Distrito Federal. Los operativos fueron comandados por el coronel Serrano, amigo íntimo de “el charro”. Ese mismo mes, Luis Gómez fue detenido por fraude mientras que Díaz de León recibió el apoyo del régimen para que estableciera los mecanismos del control gremial.⁴³

En otras palabras, la intervención y parcialidad del gobierno fue rotunda, recurriendo en lo sucesivo al charrismo sindical como medida para garantizar que los movimientos obreros no cobraran mayor fuerza y no llegaran a convertirse en amenazas mejor articuladas. De ese modo, se modificaría la relación del Estado con los líderes sindicales, anteponiendo estos últimos su posición ventajosa por encima del bienestar y los intereses de sus representados, desvirtuándose, según Medina Peña, en un “apoyo incondicional y acrítico. El respaldo independiente y razonado se había convertido, de repente, en amiguismo y petición de oportunidades para colaborar”.⁴⁴

A pesar del orden político que se adjudicaba a las funciones del partido único, apenas iniciado el período presidencial de Adolfo Ruíz Cortines (1952-1958), el grupo dominante recibió duras críticas de la población en general. Debido a la corrupción administrativa, la imagen de los funcionarios públicos resultó notablemente afectada al término de la gestión de Miguel Alemán.⁴⁵

⁴² Medina Peña, *op. cit.*, pp. 160-162.

⁴³ Carr, *op. cit.*, p. 178.

⁴⁴ Medina Peña, *op. cit.*, p. 134.

⁴⁵ Olga Pellicer y José Luis Reyna, *El afianzamiento de la estabilidad política. 1952-1960*, pp. 17-18.

Dos años después de que tomara posesión, la administración de Ruíz Cortines debió hacer frente a la devaluación del 17 de abril de 1954. Ante tal situación el gobierno federal dio muestras del control que podía ejercer sobre las organizaciones obreras. En este caso, los trabajadores exigieron un aumento salarial que compensara el alza de los precios, aumento que fue rápidamente otorgado por no suponer mayor complicación y como medida conciliadora por parte del Estado. Esta acción demostró que la apuesta del gobierno seguía estando en favor de la “negociación controlada” con los movimientos populares y en la ampliación de sus redes. De acuerdo con Olga Pellicer, “un elemento importante para la consolidación del sistema político mexicano durante la segunda mitad del ruizcortinismo, fue la capacidad del partido para seguir ampliando su base de apoyo al incorporar a su seno mayor número de sindicatos y más personas”.⁴⁶

Sin embargo, algunas inconformidades sociales no pudieron ser resueltas con facilidad. No todos los líderes fueron tan dóciles ni condescendientes en las negociaciones y, en más de una ocasión, los movimientos perduraron e incomodaron al régimen más allá de lo que estaba dispuesto a tolerar.

Evidentemente, el proceder del gobierno no era el mismo para todos los acontecimientos, dependía en gran medida del carácter del movimiento y de la capacidad de sus dirigentes. Cuando las movilizaciones eran reducidas y aisladas, facilitaban el uso de recursos represivos por parte del Estado. En caso contrario, si la lucha mostraba suficiente cohesión y fuerza y contaba con el apoyo de otros sectores, no se optaba por una represión directa sino que se intervenía de forma más conciliadora, pero siempre con pragmatismo, calculando los gastos y evitando los daños en la medida de lo posible.⁴⁷ En un texto de los años setenta, Mario Huacuja señala:

el Gobierno cuenta con infinidad de recursos que le permiten dar respuesta a las distintas luchas de los trabajadores. Utiliza desde la represión abierta (encarcelamiento, uso del ejército y la policía, secuestros) hasta la mediación

⁴⁶ *Ibid.*, p. 111.

⁴⁷ Huacuja, *op. cit.*, pp. 55-56.

arbitral en los conflictos, pasando por la utilización de una serie de medidas legales para obstaculizar las luchas.⁴⁸

En 1958 el SNTE entró en conflicto con el Estado. Como protagonistas de dicha pugna destacan la sección IX dirigida por Othón Salazar y el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), teniendo ambos por consigna el aumento salarial. Los dirigentes de la SEP tacharon a Othón Salazar de “líder comunista” con el desprestigio que ello implicaba en esa época.⁴⁹

El movimiento creció y, para finales de abril del mismo año, miembros del MRM tomaron las oficinas de la SEP. Con dicha acción presionaron a las autoridades para negociar y se logró un triunfo significativo en la defensa de los intereses de los trabajadores de la educación, obteniendo el solicitado aumento salarial. Sin embargo, el protagonismo que estaba alcanzando Othón Salazar se contrapuso a los intereses gubernamentales y, acusado de conspiración, fue secuestrado y encarcelado en septiembre de 1958.⁵⁰

Mayor impacto tuvo el movimiento ferrocarrilero de 1958-1959, que constituyó uno de los puntos más álgidos del conflicto Estado-trabajadores. En este caso, nuevamente por conflictos salariales —como la disminución de los mismos— suscitaron el malestar de los empleados, dirigidos por Demetrio Vallejo. La relevancia de dicho levantamiento recayó, según Olga Pellicer, en el hecho de haber sido “el primer movimiento social proletario importante que llegó a poner en crisis al sistema político, momentáneamente”,⁵¹ debido en gran medida a la importancia del servicio y a los cerca de sesenta mil miembros con que contaba la organización. No obstante, el movimiento logró ser frenado por la maquinaria estatal y Demetrio Vallejo terminó en prisión.

El mismo día en que el sindicato ferrocarrilero ordenó a sus miembros solidarizarse con el resto de sus compañeros, justo cuando los paros se convirtieron en una huelga nacional, el 28 de marzo de 1959, el Estado asestó al

⁴⁸ *Idem.*

⁴⁹ Pellicer, *op. cit.*, p. 146.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 155. Othón Salazar fue liberado tres meses después, en diciembre de 1958, ya con López Mateos en el poder.

⁵¹ *Ibid.*, p. 157.

movimiento un golpe fulminante. Según Carr, “los soldados, la policía y los servicios secretos lanzaron entonces un ataque bien coordinado y masivo contra los miembros del STFRM”.⁵² Como resultado del ataque, los dirigentes del movimiento y miles de ferrocarrileros fueron detenidos. Las tropas sitiaron algunos suburbios de la ciudad de México habitados por obreros del gremio. Cerca de diez mil trabajadores perdieron sus empleos. Dos diplomáticos soviéticos fueron expulsados y varios miembros de la dirección del PCM fueron detenidos y encarcelados; la mayoría de los sentenciados permanecieron en la cárcel hasta 1970, y un importante número de ferrocarrileros fueron asesinados.⁵³

Sin perder de vista las facultades coercitivas del gobierno como punto clave para la desarticulación de los movimientos de protesta, deben también destacarse los errores y las deficiencias propias de dichos movimientos. En el caso concreto del sindicato ferrocarrilero suele cuestionarse el manejo estratégico de las huelgas y los paros laborales, mecanismos de presión que en primera instancia brindaron buenos dividendos pero que a la postre serían insuficientes. Ante la ausencia de una línea de acción bien planificada y sin el apoyo de otras facciones, la supresión del movimiento era cuestión de tiempo. En palabras de Barry Carr

Los trabajadores ferrocarrileros se dejaron llevar por el entusiasmo generado por sus primeras victorias y permitieron que la lógica de la espontaneidad y de la confianza en sí mismos dictaran su estrategia y su táctica. Ese ambiente no era propicio para una cuidadosa evaluación de cómo se iba cambiando el carácter de las movilizaciones ferrocarrileras entre octubre de 1958 y marzo de 1959: de una demanda principalmente económica a una amenaza esencialmente política para el estado.⁵⁴

Es decir, el movimiento de los trabajadores careció de solidez, al tiempo que cruzaron la línea de lo permisible por el gobierno.

Para el año de 1962 tuvo lugar otro hecho emblemático de represión previo al movimiento estudiantil del 68. Tocó el turno al dirigente campesino Rubén Jaramillo, quien luchó por mejorar los derechos y las condiciones laborales de los

⁵² Carr, *op. cit.*, p. 211.

⁵³ *Ibid.*, p. 212.

⁵⁴ *Ibid.*, p. 220.

trabajadores del campo. Fue asesinado por militares el 23 de mayo de 1962 en el estado de Morelos junto con su familia.

En la segunda mitad del año 1968 se desarrolló el movimiento estudiantil de mayor trascendencia, punto neurálgico en la historia del siglo XX mexicano. En él convergieron diversos factores que, si bien no surgieron en ese momento, constituyeron las causas estructurales del movimiento.⁵⁵ En efecto, las condiciones del país, como la crisis del modelo económico, la inconformidad ante la organización política y el malestar en las crecientes clases medias,⁵⁶ propiciaron en buena medida que el movimiento tuviera un mayor impacto en términos sociopolíticos. A pesar de que surgió de un simple problema que pudo ser resuelto fácilmente (la riña entre dos grupos de jóvenes el 22 de julio), la represión y las acciones violentas empleadas por las autoridades en contra de los estudiantes durante los primeros días del movimiento, fueron detonante del mismo y núcleo de las demandas del pliego petitorio,⁵⁷ aunado al entorno político y social de la época que lo dotaron de mayor sentido.

Como adelanté, el origen del conflicto suele fecharse el 22 de julio, día en el que la policía de la ciudad de México intervino de forma violenta para controlar una

⁵⁵ De acuerdo con Francisco López Cámara, a partir de la década de los sesenta se generó una coyuntura que ubicó las principales conmociones políticas en las zonas urbanas y dentro de un marco social casi exclusivo de las clases medias. Las tensiones sociales y los conflictos políticos procedentes de las protestas obreras y las luchas sindicales, se desplazaron paulatinamente hacia las capas medias de la población, en donde se incluyen los problemas estudiantiles. Francisco López Cámara, *El desafío de la clase media*, p.13. Si bien los estudiantes son un grupo social multclasista, para el año de 1966, los datos proporcionados por el Departamento de Estadística de la UNAM señalan que “el 2.85% de los estudiantes universitarios procede del campesinado; el 14.66% de la clase obrera y el resto del sector de la pequeña, mediana o alta burguesía”, citado en Ramón Ramírez, *El movimiento estudiantil de México: julio/diciembre de 1968*, p. 29. Mencionar también que, dentro de las protestas de “las capas medias de la población” de las que habla López Cámara, se encuentran las huelgas de maestros y médicos en 1960 y 1965 respectivamente.

⁵⁶ Sobre las clases medias habré de ahondar en el siguiente apartado.

⁵⁷ Los seis puntos del pliego petitorio son: 1. Libertad a los presos políticos. 2. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiola, así como también del teniente coronel Armando Frías. 3. Extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo de la represión, y no creación de cuerpos semejantes. 4. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal (delito de disolución social), instrumentos jurídicos de la agresión. 5. Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos, víctimas de la agresión del viernes 26 de julio en adelante. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de la policía, granaderos y ejército. *Ibid.*, p. 27.

riña suscitada en la Plaza de la ciudadela entre jóvenes que se encontraban jugando fútbol americano; ese mismo día las autoridades entraron por la fuerza a las vocacionales 2 y 5 del IPN. Cuatro días después, el 26 de julio, con motivo de la celebración del aniversario de la Revolución cubana, dos marchas estudiantiles que pretendían llegar al Zócalo de la ciudad chocaron nuevamente con la policía. Los enfrentamientos continuaron y, en la madrugada del 30 de julio, las autoridades detuvieron a un importante número de jóvenes luego de la toma de las preparatorias 1, 2 y 3; acciones entre las que destaca el disparo de “bazooka” que destruyó la puerta de la histórica preparatoria de San Ildefonso. Hechos que exacerbaban los ánimos del incipiente movimiento.⁵⁸

Desde entonces comenzó a librarse una disputa pública en términos discursivos; los estudiantes mediante mítines, “pintas” y “pegas”, las autoridades a través de los medios de comunicación “oficiales”, y, otras figuras públicas a favor o en contra del movimiento, desde sus tribunas. Así por ejemplo, en relación con los acontecimientos del 30 de julio, el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, defendió el accionar del régimen al sostener que “las medidas extremas adoptadas se orientan a preservar la Autonomía Universitaria de los intereses mezquinos e ingenuos, muy ingenuos, que pretenden desviar el camino ascendente de la Revolución Mexicana”.⁵⁹ Mientras que, en un enfoque totalmente opuesto, el Rector de la UNAM, Javier Barrios Sierra, señaló que “la institución manifiesta profunda pena por lo acontecido. La autonomía no es una idea abstracta, es un ejercicio responsable que debe ser respetado por todos”,⁶⁰ declaraciones en evidente desaprobación hacia dichos eventos.

En protesta hacia los actos represivos del gobierno en contra de los estudiantes, el 1° de agosto se llevó a cabo una marcha que partió de la Ciudad Universitaria y que estuvo encabezada por Barrios Sierra, protagonista que, en ese momento, manifestó su apoyo hacia el movimiento y exhortó a luchar por los estudiantes

⁵⁸ *Ibid.*, “Cronología. Primera etapa: 22 de julio/ 5 de agosto de 1968”, pp. 145-196.

⁵⁹ Citado en *Ibid.*, p. 93.

⁶⁰ Citado en *Ibid.*, p. 103.

presos, en contra de la represión y a favor de la libertad de la educación. Ese mismo día llegó a señalar que: “sin ánimos de exagerar, podemos decir que se juegan en esta jornada no sólo los destinos de la Universidad y el Politécnico, sino las causas más importantes, más entrañables para el pueblo de México”.⁶¹

Para el 5 de agosto se realizó otra marcha, esta vez, partió desde Zacatenco y, aunque no contó con la presencia del director del IPN, Guillermo Massieu, a esas alturas, las principales instituciones de educación superior de la capital ya se encontraban en huelga.⁶²

El surgimiento del Consejo Nacional de Huelga (CNH) fue sin duda otro momento significativo que marcó la pauta que habría de seguir el movimiento, lo dotó de un programa y de una dirección colectiva unánimemente respetada. Se integró entre los días 8 y 10 de agosto con cerca de 210 estudiantes (tres por cada una de las 70 instituciones educativas involucradas en el movimiento) que fueron elegidos democráticamente en asambleas.⁶³

La línea de acción que siguió el CNH fue muy participativa y buscaron con ahínco involucrar al resto de la población; la frase “Únete, pueblo”, entonada con frecuencia en marchas y mítines, hacía evidente la aspiración por un movimiento más plural. Romper el cerco informativo, sumar otros grupos sociales a su causa y entablar un diálogo público con las autoridades, fueron algunos de los objetivos primordiales que persiguieron los militantes del movimiento.

Entre las marchas destacan la del 13 de agosto, por ser la primera que culminó en el Zócalo y que logró congregarse a un importante número de asistentes (200 mil aproximadamente); la marcha del 27 de agosto, que fue, de todas, la de mayor

⁶¹ Citado en *Ibid.*, p. 104.

⁶² Con dicho acontecimiento Ramón Ramírez marca el final de la primera etapa de su cronología.

⁶³ Ramírez *op. cit.*, p. 24. Con respecto a la conformación del CNH cabe mencionar que, si bien Ramón Ramírez destaca la participación de “todas las corrientes políticas que existían entre el alumnado: comunistas, demócrata-cristianos, trotskistas, Liga Espartaquista, maoístas, guevaristas, socialistas...” (*Idem.*), de acuerdo con Luis González de Alba, la generalización a ultranza del gobierno que etiquetaba a los miembros del CNH como comunistas no podía ser más errónea, toda vez que, de los más de 200 integrantes, menos de 10 pertenecían realmente al Partido Comunista. Luis González de Alba, *Los días y los años*, pp. 19-20.

convocatoria, en la que se reunió más de 400 mil participantes que se dirigieron al Zócalo (al término del evento se decidió dejar una guardia de estudiantes que fue desalojada mediante el uso de tanques); y, finalmente, una de las más emblemáticas, la “marcha del silencio”, efectuada el 13 de septiembre. Esta última, se cometa, fue una muestra de madurez y determinación de los jóvenes estudiantes que sirvió para reanimar el movimiento.⁶⁴

Días después, el 18 de septiembre, luego de varias amenazas, el ejército tomó por sorpresa las instalaciones de la Ciudad Universitaria, acción en la que se arrestó a un importante número de personas. El 23 del mismo mes se repitió la operación en el Casco de Santo Tomás. En respuesta a ello, el Rector de la UNAM solicitó la renuncia a su cargo en lo que aparentó ser un logro de la estrategia de las autoridades, sin embargo, la gente censuró dichas medidas y Barros Sierra terminó por no dimitir. El 30 de septiembre el ejército desocupó el campus universitario pero lo peor estaba por ocurrir.⁶⁵

La noche del 2 de octubre es recordada por los trágicos acontecimientos de Tlatelolco,⁶⁶ mismos que marcaron el fin del movimiento con un importante número de estudiantes encarcelados y una cantidad desconocida de fallecidos.⁶⁷

Más allá de que la narración de los acontecimientos del movimiento estudiantil pueda variar, sobre todo en lo que a cifras se refiere (número de asistentes a las

⁶⁴ Vid., Ramírez, *op. cit.*, “Segunda etapa: 6/13 de agosto de 1968”, “Tercera etapa: 14/27 de agosto de 1968” y “Quinta etapa: 2/13 de septiembre de 1968”.

⁶⁵ Vid., Ramírez, *op. cit.*, “Sexta etapa: 14 de septiembre/2 de octubre de 1968”, pp. 317-397.

⁶⁶ Pasadas las 18:00 horas, dos helicópteros sobrevolaban la Plaza de las tres culturas; desde el edificio Chihuahua los representantes del CNH se dirigían a las más de cinco mil personas reunidas. Tres bengalas arrojadas fueron la señal para que interviniera el ejército; los soldados por un lado, disparando en contra de la multitud, los tanques cortando las posibles salidas, y el batallón “Olimpia”, guante blanco en mano, prestos a detener a los líderes del movimiento. Las acciones planeadas por las autoridades se efectuaron en medio del caos y la confusión; mujeres, niños, ancianos, estudiantes e incluso militares, figuraron entre muertos y heridos. La información oficial tasó en 35 el número de víctimas fatales, dato que contrasta con los más de 300 que sugirieron medios internacionales. Las discusiones con respecto a los acontecimientos del 2 de octubre, y del 68 en general, aún siguen abiertas. *Ibid.*, pp. 386-397.

⁶⁷ Tras lo acontecido en la Plaza de las tres culturas los juegos olímpicos de México 68 se efectuaron sin mayores incidentes del 12 al 27 de octubre; el día 31 del mismo mes se realizó la primera manifestación después de Tlatelolco; y, para el 6 de diciembre, el CNH se había decretado disuelto. Vid., *Ibid.*, “Séptima etapa: 3 de octubre/4 de noviembre de 1968” y “Octava etapa: 5 de noviembre/6 de diciembre de 1968”.

marchas, detenidos, encarcelados y muertos), las interpretaciones y las lecturas que se han realizado sobre el 68 son múltiples y contrastantes entre sí. Por un lado, se tiene la versión oficial y la de los partidarios del régimen, caracterizadas por defender el proceder del gobierno, al tiempo que condenaron las acciones estudiantiles y advirtieron sobre una conspiración en contra de México guiada por “fuerzas oscuras” (el comunismo por destacar alguna), e incluso llegaron a señalar que “los muertos de aquella refriega fueron el resultado lastimero de una abierta provocación contra la estabilidad del país y su gobierno”.⁶⁸

Por otra parte, a diferencia de la versión oficial, para la mayoría de los intelectuales y para los partícipes del movimiento, el gobierno fue rebasado por las demandas bien fundamentadas por un estudiantado con una conciencia política y social plena. Se trató, según Ramón Ramírez, “de un movimiento en el que se sintetiza un conjunto de reivindicaciones progresistas y democráticas amparadas por los preceptos constitucionales; de un movimiento sin precedentes en la historia de México”.⁶⁹ De tal modo que, de manera casi unánime, se asume que el 68 marcó un antes y un después en la historia de nuestro país, fue un *parteaguas*, el punto neurálgico del cual se parte para iniciar cualquier acción política.⁷⁰

Sin poner en duda la trascendencia del movimiento estudiantil, vale la pena mencionar la postura que toma Luis González de Alba, líder y figura indiscutible del CNH, en su ensayo “1968: La fiesta y la tragedia”, publicado en *Nexos* en septiembre de 1993 a propósito del 25 aniversario de la masacre de Tlatelolco, en el cual realiza una crítica severa hacia lo que suele aceptarse en torno al movimiento. Critica la falta de oficio de los dirigentes estudiantiles para negociar

⁶⁸ Héctor Jiménez Guzmán, *El 68 y sus rutas de interpretación: una crítica historiográfica*, p. 32. Véase también Rodríguez Kuri, *op. cit.*

⁶⁹ Ramírez, *op. cit.*, p. 23.

⁷⁰ La idea del 68 como un hito en la historia mexicana es comúnmente aceptada, Ramírez, Poniatowska, Monsiváis, Paz, son, por mencionar algunos, defensores de dicha concepción. Al respecto Jiménez Guzmán señala que: “La idea de que el 68 representó un *parteaguas* en la historia mexicana reciente se ha consolidado de tal manera que hoy es difícil identificar voces dentro de la opinión pública que rompan la continuidad de ese discurso. La importancia de la protesta estudiantil de ese año parece quedar de manifiesto en las valoraciones que, desde diversas perspectivas analíticas y disciplinarias, y desde diversos posicionamientos ideológico-sociales, se le han otorgado con el paso del tiempo”, Jiménez Guzmán, *op. cit.*, pp. 11-12.

con el gobierno, la carencia de objetivos concretos, la ausencia de seriedad en algunos temas, el desconocimiento del entorno sociopolítico por parte de la mayoría de los participantes, y la nula, pero irónicamente vanagloriada, conciencia revolucionaria.⁷¹ El discurso de González de Alba debió ofender a más de un ex militante del movimiento y a aquellos que comparten la versión “romántica” del 68. Sin embargo, no importa aquí cuestionar la validez de sus ideas, lo que me interesa es asociar su crítica con algo que bien pudo repetirse en las marchas de los habitantes de las CEP, la participación sin conocimiento o convencimiento de causa.

Si bien en el 68 los estudiantes, de una u otra manera, lograron sacudir las conciencias, el problema fue que, tal como ocurrió con otras luchas populares, ésta culminó drásticamente y no consiguió establecer una base organizada que diera continuidad al movimiento. De hecho, según Enrique Semo, “el 68 no fue en la práctica el inicio de una nueva época, pero sí una explosión de esperanzas y cuestionamientos que actuó poderosamente en la década que le siguió”.⁷²

A casi tres años de los trágicos sucesos de Tlatelolco, estudiantes y autoridades volverían a protagonizar un cruento enfrentamiento. Se trató de una manifestación en apoyo al conflicto de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) el día 10 de junio de 1971, los estudiantes tenían planeado dirigirse del Casco de Santo Tomás al Monumento a la Revolución. En el trayecto fueron atacados por granaderos y por un cuerpo represivo paramilitar denominado “los halcones”, quienes ocasionaron la muerte de varios manifestantes; el gobierno, de la voz del regente de la ciudad, Alfonso Martínez Domínguez, negó la existencia de dicho grupo y declaró que se trató de un pleito entre estudiantes.⁷³

Luego de una serie de protestas y el empuje de algunas notas de la prensa, se logró la renuncia de tres altos funcionarios: Alfonso Martínez Domínguez, regente

⁷¹ Vid., Luis González de Alba, “1968: La fiesta y la tragedia”, en <http://historico.nexos.com.mx/articuloEspecial.php> [en línea].

⁷² Enrique Semo, “La izquierda *vis-à-vis*”, en Ilan Semo et al., *La transición interrumpida: México 1968-1988*, p. 128.

⁷³ Huacuja, *op. cit.*, p. 101.

del Departamento del Distrito Federal y Rogelio Flores Curiel, director de Policía y Tránsito, ambos el día 15 de junio de 1971; y Julio Sánchez Vargas, Procurador General de la República, el 19 de agosto del mismo año.⁷⁴ No obstante, los estudiantes no lograron canalizar la efervescencia por la falta de unidad, y fue hasta el 17 de mayo de 1972 cuando volvió a marchar un importante número en apoyo a Vietnam.

Vale la pena destacar que, de acuerdo con Huacuja, un importante factor del desgaste del movimiento estudiantil fue el crecimiento de grupos porriles dentro de los planteles educativos. En la UNAM el principal era el “grupo Francisco Villa” de la facultad de Derecho, que se convirtió en abastecedor de drogas, situación que propició fuertes riñas entre los distintos grupos al interior del campus universitario; de ahí, los medios de comunicación darían inicio a una campaña de desprestigio en contra de dicha institución.⁷⁵

Por otra parte, derivado del movimiento estudiantil del 68, el Estado tuvo que hacer frente a dos nuevas estrategias empleadas por los trabajadores de las instituciones educativas y por el estudiantado: “el sindicalismo universitario y el surgimiento del ultraizquierdismo violento de la guerrilla urbana”.⁷⁶ El sindicalismo universitario intervino por la vía de la legalidad, mientras que, en el ala radical de las organizaciones estudiantiles se optó por actos directos y clandestinos.

La opción violenta del estudiantado tuvo como antecedente los casos de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas en la sierra de Guerrero durante los años sesenta. Su lucha guerrillera se remonta a 1967, año en el que ocurrió una masacre de maestros y padres de familia que se manifestaban en Atoyac de Álvarez en el estado de Guerrero.⁷⁷

⁷⁴ *Ibid.*, p. 102.

⁷⁵ *Ibid.*, pp. 103-104.

⁷⁶ Luis Medina Peña, *Hacia el nuevo Estado. México, 1920-1994*, p. 221.

⁷⁷ Este hecho orilló a varios maestros a iniciar la lucha en las montañas con el apoyo de los campesinos, en un movimiento que se sostuvo durante casi una década. Lucio Cabañas murió en diciembre de 1974. Carr, *op. cit.*, p. 236.

Los movimientos guerrilleros urbanos estuvieron integrados, en buena parte, por estudiantes indignados con el gobierno. Ellos creían que ante la falta de alternativas democráticas las armas y la acción directa representaban su única opción. El problema para las guerrillas urbanas fue la ausencia de una línea política, puesto que actuaron con vehemencia pero sin experiencia y de manera aislada, faltos del respaldo de otros grupos, lo que facilitó la labor represiva de las autoridades.⁷⁸

Dentro del grupo de las guerrillas urbanas merece especial atención la llamada Liga 23 de Septiembre. Fundada en 1973, se caracterizó por sus acciones violentas extremistas y una serie de secuestros de personajes públicos. Correspondió al aparato “antiguerrillero” del sexenio echeverrista frenar y poner fin a las maniobras de la Liga mediante el encarcelamiento o el asesinato de sus miembros durante diversos operativos. Finalmente, escribe Luis Medina Peña, “el frustrado intento de secuestrar a la hermana del candidato priista a la presidencia, Margarita López Portillo, en agosto de 1976, último operativo desesperado, marcó la derrota definitiva de la Liga.”⁷⁹

Es importante mencionar la interpretación propuesta por Mario Huacuja y José Woldenberg en su obra de 1976, en la que acusan al gobierno de manejar grupos —como la misma Liga 23 de Septiembre— con la finalidad de desprestigiar el verdadero sentido de los movimientos democráticos, progresistas o revolucionarios. De acuerdo con esta interpretación, la intención de las autoridades había sido ligar a las asociaciones de protesta con actos criminales para desvirtuarlas, y, de ese modo, buscar endurecer los métodos represivos utilizados para contener los embates antinacionalistas.⁸⁰

Por la vía legal tampoco fueron muy propicias las condiciones de acción para la oposición, de hecho, los partidarios y los grupos políticos de izquierda existieron

⁷⁸ *Ibid.*, pp. 143-149.

⁷⁹ Medina Peña, *op. cit.*, p. 226.

⁸⁰ Huacuja, *op. cit.*, pp. 149-152. Es importante mencionar esta acusación de los autores hacia el gobierno puesto que, del mismo modo, las autoridades desvirtuaron el uso de las CEP aun cuando ellos mismos las utilizaron como “grupos de choque”.

en contra y a pesar del gobierno. Barry Carr afirma que “durante varios años a partir de 1959, el Partido Comunista Mexicano (PCM) se vio forzado a funcionar en condiciones de semilegalidad”.⁸¹ El Estado actuó con mano dura ante toda amenaza que atentara en contra del orden social por él establecido. Persecuciones, censura y represión fueron acciones comúnmente utilizadas, justificada o injustificadamente, para mantener el control. Estas medidas gubernamentales respondieron más a la preservación del *statu quo* que a una búsqueda genuina del bienestar de la ciudadanía. A saber, para el grupo en el poder no era conveniente modificar las condiciones establecidas ni crear oportunidades para otras facciones.

Más allá de todas las adversidades que enfrentaron los grupos de izquierda, tales como la notable reducción de los miembros del PCM o las represiones obreras, el balance final a mediados del siglo XX, según Barry Carr, no fue del todo desfavorable sino que, por el contrario, proporcionó las bases para las futuras manifestaciones. Las nuevas formas de movilización y organización de las luchas populares, así como la incorporación de los jóvenes estudiantes y de los trabajadores urbanos a las causas de campesinos y obreros, fueron logros de la izquierda mexicana.⁸²

En el terreno de la opinión pública también se libraron batallas entre las autoridades y los grupos opositores, ambos buscando legitimar sus posturas y acciones al mismo tiempo que intentaban desprestigiar al otro. Vale la pena mencionar el conflicto que sostuvo Luis Echeverría en contra del director del periódico *Excélsior* Julio Scherer. La línea editorial del periódico en cuestión lo convirtió en la publicación más crítica de la época; desde principios de los años setenta, su desapego hacia los intereses de la imagen pública del gobierno y sus investigaciones controversiales colocaron al diario en medio de una “guerra sucia”. Para julio de 1976 el *Excélsior* fue objeto de la ofensiva presidencial que

⁸¹ Carr, *op. cit.*, p. 251.

⁸² *Ibid.*, p. 227.

culminó con el cese del director y la imposición de un nuevo enfoque periodístico.⁸³

Todos los acontecimientos de inconformidad social que han sido mencionados respondieron a distintas causas. No obstante, en términos generales, la postura política del Estado ante los levantamientos fue represiva y dentro de un ambiente de “paranoia nacionalista”. Así lo destacó Luis Medina Peña para el caso de las instituciones educativas:

En la segunda mitad de los sesenta las instituciones públicas de educación superior, particularmente la UNAM y el IPN, se encontraron estrechamente vigiladas por el poder público. Todas las corporaciones policiacas tenían agentes disfrazados de estudiantes encargados de detectar el más mínimo acto o manifestación en contra del Gobierno. Lo mismo sucedió en los estados con universidades importantes. Los cuerpos nacionales de seguridad política, entrenados en la colaboración anticomunista con Estados Unidos desde el inicio de la Guerra Fría, prestaban ya una deformación profesional: en cualquier protesta social, sobre todo estudiantil, veían las manos de los rojos y una conspiración trasnacional en toda forma.⁸⁴

Situaciones que, como se verá en los siguientes capítulos, se empatan notablemente con lo que ocurrió en las CEP.

1.3. Plano social

Para los líderes políticos que dirigieron el país en el período comprendido entre 1940 y 1980, el fin sí justificó los medios. El empuje industrializador y los buenos dividendos monetarios obtenidos durante el “milagro mexicano” fueron suficientes para respaldar un proyecto de nación centrado fundamentalmente en lo económico y en la permanencia del partido dominante en el poder. No obstante, dicho proyecto se mostró carente de alternativas políticas e insuficiente en lo que a programas sociales se refería. Es decir, ocupados con el auge financiero, las autoridades dejaron de lado el desarrollo de México en su conjunto, de modo tal que el crecimiento económico se concentró en un selecto y reducido grupo de

⁸³ Medina Peña, *op. cit.*, p. 229.

⁸⁴ *Ibid.*, p. 215.

políticos y empresarios, así como en las clases medias, al tiempo que las diferencias sociales se acentuaban cada vez más.

De acuerdo con los datos presentados por Luis Medina Peña que se basan en un estudio a nivel nacional que abarcó de 1950 a 1963, las cifras que evidenciaban la disparidad socioeconómica eran contundentes. El 70% de las familias, pertenecientes a los sectores más bajos de la población, sufrieron un deterioro en su ingreso durante esos 13 años. La clase media por su parte, correspondiente al 20% de las familias, logró duplicar sus ingresos en el mismo período. Mientras que la clase alta, el 10% restante, se mantuvo prácticamente estable con el 49% del ingreso total nacional, proporción que comenta Medina Peña: “fue precisamente la materia del escandaloso descubrimiento de esos años: el 10% de la población acaparaba la mitad del ingreso nacional, en tanto al 90% restante de la población le tocaba la otra mitad, a pesar de la retórica revolucionaria y distributiva oficial”.⁸⁵

En términos generales, las mejoras en los servicios de salud y en la producción de alimentos propiciaron un descenso en la mortalidad y un aumento en la natalidad, lo que a su vez provocó un crecimiento en las tasas de población que osciló entre el 3.0 y 3.5% anuales de 1950 a 1970. Esta situación impulsó a las autoridades a plantear una política demográfica oficial, puesto que el gasto destinado por el Estado para las cuestiones sociales era insuficiente ante el incremento poblacional.⁸⁶

Frente al aumento demográfico —convertido entonces en un problema apremiante— el gobierno de Luis Echeverría puso en marcha nuevas políticas de población y reformó el artículo 4° Constitucional en el año de 1972, promoviendo una toma de decisión en pareja “de manera libre, responsable e informada sobre

⁸⁵ Medina Peña, *op. cit.*, p. 170. La situación no variaría mucho en los años subsecuentes. En esta misma referencia, Medina Peña complementa la información con una encuesta realizada por el Banco de México en 1968, la cual concedía el 50% del ingreso total distribuido entre el 85% de la población, mientras que la mitad restante se repartía entre el otro 15% de habitantes.

⁸⁶ *Ibid.*, p. 175.

el número y espaciamiento de los hijos”.⁸⁷ Entre otras medidas, ese mismo año se expidió una nueva Ley General de Población y otra Ley General de Asentamientos Humanos, que, como su nombre lo indica, establecía las bases jurídicas para regular los asentamientos humanos y la distribución de la población en el territorio nacional. Sumado a ello, en 1976 se creó el Consejo Nacional de Población (Conapo), órgano encargado de la planificación demográfica del país.⁸⁸

La distribución poblacional en el territorio nacional constituyó un reto adicional en la cuestión demográfica. Y aunque el problema se presentó en todo el país, las ciudades representaron un mayor desafío para las autoridades. En efecto, las oportunidades laborales en las grandes urbes y su infraestructura se combinaron con la desatención y la escasez de oportunidades en el medio rural. De ese modo, la economía agrícola debilitada y la urbanización dieron como resultado “la migración interna a las urbes y la consiguiente marginación social, y la emigración a los Estados Unidos”.⁸⁹

La concentración demográfica en las ciudades generó un mayor número de demandas sociales que saturaron las ofertas y rebasaron las capacidades del gobierno. Por ello, los habitantes de las grandes urbes tuvieron que lidiar con las deficiencias de los servicios públicos en general, lo que provocó más de una muestra de inconformidad y malestar social.⁹⁰ Sin embargo, cabe mencionar la existencia de grupos privilegiados claramente favorecidos por su vínculo con el gobierno. Los líderes sindicales, los grandes empresarios y la burocracia fueron sectores que, desde la década de los años cuarenta, disfrutaron de ciertas concesiones, poniendo en duda la labor del Estado como árbitro imparcial y conciliador de intereses sociales. Incluso las plazas destinadas para los

⁸⁷ *Ibid.*, p. 182.

⁸⁸ *Idem.*

⁸⁹ *Ibid.*, p. 271.

⁹⁰ Gustavo Garza Villarreal, *El proceso de industrialización en la ciudad de México, 1821-1970*, p. 156.

burócratas eran repartidas, la mayoría de las veces, entre personas cercanas al grupo dominante mediante diversos métodos de “padrinazgo político”.⁹¹

Así, el partido oficial era el canal más importante para la participación de la clase media en el ámbito político, con la formación académica como su vía de acceso. De tal forma que, para dicha clase social, la escuela se convirtió en el centro de su expansión y la educación en el sustento de su nivel económico y de su posición como grupo de prestigio.⁹² Según Soledad Loaeza,

[A las clases medias] La educación las ha distinguido y definido consistentemente, ha sido la base de su prestigio, ha justificado sus aspiraciones de movilidad social y sus pretensiones de liderazgo político, pero sobretodo les ha proporcionado instrumental para orientar ideológicamente a la sociedad y con ello preservar una posición que, en México, es de privilegio.⁹³

De acuerdo con Soledad Loaeza, lo más complicado de estudiar las clases medias es definir las, puesto que sigue a discusión tanto sus alcances como su conformación.⁹⁴ Empero, en el caso de México, ubicar el momento de su eclosión no resulta tan complicado, según Gabriel Careaga:

La necesidad que tenía el nuevo aparato político de técnicos, de profesionales, de intelectuales, hizo posible el crecimiento de la burocracia y un modelo de sociedad que beneficiaba, fundamentalmente, a esta nueva clase media. Desde la época de Ávila Camacho se pensó en toda una política de infraestructura en las ciudades, que se expresaba en la educación, en los empleos, en la salubridad, que permitió que esta clase media creciera como en ninguna etapa del país.⁹⁵

Irónicamente, las condiciones idóneas para el desarrollo de la clase media terminarían afectándolas indirectamente. A principios de los años sesenta, su crecimiento numérico dio lugar a dos complicaciones: la primera, ocasionada por las dificultades para satisfacer la gran demanda educacional; la segunda, producto del desequilibrio existente entre el número de egresados y su adecuado acomodo en el ámbito laboral.⁹⁶ Así, los jóvenes, principalmente de clase media,

⁹¹ López Cámara, *op. cit.*, pp. 52-53.

⁹² Soledad Loaeza, *Clases medias y política en México*, p. 56.

⁹³ *Ibid.*, p. 13.

⁹⁴ *Ibid.*, p. 30.

⁹⁵ Gabriel Careaga, *Biografía de un joven de la clase media*, pp. 14-15.

⁹⁶ López Cámara, *op. cit.*, p. 53.

comenzaron a protestar en contra del orden establecido y de la escasez de oportunidades para el desarrollo profesional.

El temor al comunismo fue otro de los temas que estuvo constantemente en la agenda del Estado durante distintos lapsos del siglo XX. A partir del régimen de Miguel Alemán, el PRI se declaró anticomunista y empezó a separar de sus filas a los comunistas y sus simpatizantes. Entre octubre de 1948 y finales de 1951, los tres sindicatos de industria más poderosos del país (ferrocarrileros, petroleros y mineros) fueron purgados de sus funcionarios izquierdistas mediante el uso de la fuerza pública, la manipulación y los ya mencionados “charrazos”.⁹⁷ Durante esa época, las “doctrinas exóticas”, léase el comunismo, fueron el enemigo común y la base de unanimidad entre el Estado, la iglesia, los empresarios y los grandes grupos de clases medias.⁹⁸

Por su parte, los promotores de la izquierda acusaban al régimen de representar los intereses de la burguesía en alianza con el imperialismo estadounidense, principal enemigo del pueblo mexicano y causa primordial de la pobreza y la explotación según su discurso.⁹⁹

Como parte de la lucha entre las posturas ideológicas, Soledad Loaeza documentó una querrela entre un grupo de empresarios en contra de la educación socialista. El día 2 de febrero de 1962, en la ciudad de Monterrey, marcharon más de cien mil inconformes con el contenido de los libros de texto gratuito y a favor de la libertad de enseñanza. Al grito de “¡Viva México libre, católico y demócrata!”, la élite empresarial logró incluir en la disputa a una importante facción de las clases medias. Sin embargo, el verdadero motivo de la marcha fue la molestia de los empresarios relacionada con el artículo 123 Constitucional.¹⁰⁰ A la postre, como ocurrió en más de una ocasión, el conflicto terminó con la negociación entre el Estado y la clase alta, con intereses y logros ajenos al reclamo original. Mostrando así que la convocatoria y la adición de los distintos grupos sociales

⁹⁷ Carr, *op. cit.*, p. 155.

⁹⁸ Loaeza, *op. cit.*, p. 164.

⁹⁹ Carr, *op. cit.*, pp. 225-226.

¹⁰⁰ Loaeza, *op. cit.*, p. 356.

distaban mucho de perseguir el bien común, y haciendo evidente también “la calidad instrumental de la querrela escolar y de los movilizados en cuestión”.¹⁰¹

¹⁰¹ *Ibid.*, p. 340.

Capítulo 2. Activismo estudiantil

2.1. Del interior de la República a la capital

El marcado desequilibrio entre la provincia y el Distrito Federal con relación a las oportunidades y los espacios educativos fue uno de los efectos de la centralización nacional. A pesar del énfasis y del carácter prioritario con que el gobierno mexicano abordó las cuestiones educativas desde el segundo tercio del siglo XX, la educación continuó siendo un privilegio, y acceder al nivel medio superior y superior se complicaba dependiendo la región y la clase social a la que se pertenecía.¹⁰² No obstante las dificultades implícitas en la consecución de una carrera profesional, la formación académica era el medio más importante de movilización social. Así, la educación fue uno de los elementos clave para la expansión de la clase media, convirtiéndose en un buen motivo para que los estudiantes de provincia se trasladaran a la capital.¹⁰³

Según Soledad Loeza, “en 1960, 40% del total de los alumnos inscritos en el ciclo secundario de todo el país se encontraban en la capital [mientras que] los estudiantes inscritos en las instituciones de enseñanza superior de la ciudad de México representaban el 65% del total nacional”.¹⁰⁴

Durante los siguientes quince años, la proporción entre quienes estudiaban en la capital y quienes lo hacían en el resto de la república no se modificó sustancialmente. En 1976, el entonces rector de la UNAM, Guillermo Soberón, apuntó que “hasta 1975 en el área metropolitana recibieron instrucción de bachillerato el 42% del total de alumnos del país y el 52% a nivel licenciatura, en una zona que sólo ocupa el 17% del total de la población”.¹⁰⁵ Estas cifras resaltan la disparidad de opciones educativas dentro de nuestro país.

¹⁰² Loeza, *op. cit.*, pp. 33-34.

¹⁰³ El trabajo no manual (campesinos y obreros) y la pertenencia al medio urbano, eran dos requisitos, no suficientes pero sí necesarios, para considerar que algún individuo pertenecía a la clase media. Por ello, para quienes pretendían acceder a dicha clase, el hecho de trasladarse a estudiar a la ciudad se presentaba como una opción provechosa. *Ibid.*, p. 31.

¹⁰⁴ *Ibid.*, p. 129.

¹⁰⁵ S/a, (17/02/1976), “La UNAM es nacional por su historia: Soberón”, en *El Universal*.

Ante la falta de una oferta adecuada de educación superior en el interior de la república,¹⁰⁶ los jóvenes que pretendían realizar sus estudios superiores debieron mudarse a la capital del país, en donde la UNAM y el IPN constituían las principales formadoras de profesionistas. Aunque evidentemente, no todos llegarían bajo las mismas condiciones ni enfrentarían los mismos retos.¹⁰⁷ Una de las alternativas del gobierno ante los desafíos que debieron enfrentar los estudiantes provincianos fue la habilitación de las Casas de Estudiantes de Provincia.

Como antecedente de éstas, en el año de 1911 se fundó la Casa Nacional del Estudiante, erigida en la Plaza del Carmen dentro del primer plano de la ciudad de México como propuesta de José Yves Limantour. Dicho inmueble daba cabida a estudiantes de todos los estados de la república, con un funcionamiento que fue calificado positivamente y que contó, como objeto de orgullo, con la estadía de jóvenes que a la postre serían destacadas figuras políticas, como fue el caso de los ex presidentes Emilio Portes Gil y Miguel Alemán.¹⁰⁸

¹⁰⁶ De acuerdo con los datos presentados por Leoncio Lara Sáenz, el número de instituciones de educación pública superior en México, hasta antes de 1950, no excedía la docena. Entre los estados que contaban con universidad en ese período se encuentran: Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán (en estricto orden alfabético). Leoncio Lara Sáenz, “La educación pública superior en México (Panorama actual y perspectivas)”, en *biblio.juridicas.unam.mx* [en línea], PDF, pp. 11-13.

¹⁰⁷ Para ilustrar algunos de los inconvenientes que debieron enfrentar los habitantes de las CEP se cuenta con la narración de Leonardo Saucedo Bonilla, que refiere algunas vivencias de un grupo de jóvenes estudiantes —la primera generación del Instituto Tecnológico de Durango en 1950— al salir de su localidad en busca de continuar con los estudios profesionales en el Distrito Federal. En palabras de Leonardo Saucedo: “Dicha agrupación de jóvenes, que en su mayoría contaba en promedio con unos veinte años de edad, esperaba poder alojarse en el internado que por aquellos años ofrecía el Politécnico a sus alumnos y a fin de cuentas estaba conformado por una suerte de barracas. No obstante, la alta demanda causó que sólo algunos de los integrantes de aquel grupo pudieran gozar de hospedaje y el resto tuvo que conformarse con habitar bajo las gradas del estadio de prácticas ‘Salvador Camino Díaz’ ubicado en la Calzada de los Gallos”. Sucesos que evidencian, por un lado, el apremio de los estudiantes por dirigirse a la capital y, por otra parte, lo precaria que podía ser su situación. *Vid.*, Saucedo Bonilla, *op. cit.*

¹⁰⁸ A lo largo de su historia, la Casa Nacional del Estudiante ha sufrido distintas modificaciones, tanto en su estructura como en su uso, actualmente su utilización es la misma que le diera origen más de 100 años atrás. *Vid.*, Cervera Velasco, *Centro cultural y residencia para extranjeros: Casa Nacional del Estudiante*, p. 8. Otro proyecto que antecede a las CEP y que guarda cierta relación con ellas fue la Casa del Estudiante Indígena, fundada durante el mandato de Plutarco Elías Calles bajo la premisa de “civilizar” a los indios. Se pensó a manera de experimento psicosocial y subsistió de 1925 a 1932 con resultados muy distintos a los esperados. *Vid.*, Loyo, p. 101.

Como resultado del éxito de la Casa Nacional del Estudiante y en respuesta a la creciente demanda educativa, surgieron las CEP, las cuales se organizaban por estado y no recibían inquilinos de otras entidades federativas. La razón de ser de estas Casas era, en apariencia, clara y simple: pretendían dar alojamiento a jóvenes que carecieran de los recursos necesarios para costear sus estudios fuera de su lugar de origen.

El número de habitantes de cada CEP era variado, como también lo era la cantidad de Casas que tenían los estados en la capital. Por dar un ejemplo, en 1978, el estado de Michoacán contaba con siete Casas en el Distrito Federal.¹⁰⁹ A su vez, las CEP se encontraban afiliadas a distintas agrupaciones entre las cuales destacan las siguientes:

- Consejo Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia (CNCEP).
- Frente Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia (FNCEP).
- Asociación Nacional de Casas de Estudiantes (ANCE).
- Frente Integrador de Casas de Estudiantes de México (FICEM).

Por su parte, el reglamento de las CEP podría ser entendido como un conjunto de normas básicas de convivencia y comportamiento que variaba de una Casa a otra. Por ejemplo, horarios de entrada y de salida establecidos; la prohibición de la ingesta de alcohol u otras drogas; el acceso restringido a personas ajenas a la Casa y, en congruencia con su función, un adecuado desempeño académico.¹¹⁰ El tiempo demostraría que la existencia y el cumplimiento del reglamento serían meramente ilusorios (en la mayoría de los casos). La relajación de la disciplina en las Casas dio lugar a inconformidades de los vecinos, al tiempo que constituyó una de las principales armas que el gobierno utilizó en su contra.

¹⁰⁹ “En Lecumberri 30, Colonia Morelos de esta ciudad, hoy se reunieron los líderes de todas las Casas de Estudiantes de Michoacán, con el objetivo de organizarse para pedir mayor subsidio, entre otras cosas”, en AGN, Galería 2, fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-C, Exp. 10, f. 10, 31 de enero de 1978.

¹¹⁰ Gómez León, *op. cit.*, p. 44.

Las CEP eran financiadas, en su mayoría, por la extinta Secretaría de Salubridad y Asistencia, por la Secretaría de Educación Pública y por el gobierno de la entidad federativa correspondiente. Dicho subsidio contemplaba básicamente la renta del inmueble, la dotación de insumos domésticos y la ración de alimentos. En ocasiones, como ocurrió en la Casa del Estudiante Chiapaneco ubicada en la colonia Santa María la Ribera, el presupuesto otorgado también contemplaba los sueldos del personal encargado de la cocina y de la limpieza de la vivienda.¹¹¹ De no incluir dichos servicios los alumnos eran los responsables de organizar las tareas domésticas.

La información anterior es referida a detalle por Amir Gómez León en su novela *Vida de estudiantes*:

El Gobierno Federal, a través de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se había encargado de amueblarla y dotarla diariamente con treinta despensas en especie (verduras, pollo, canales de res y de cerdo, pan, leche, especias, etcétera) así como personal para que atendiera la cocina. Por su parte, el Gobierno Estatal, se encargaría de cubrir la renta mensual, en tanto que el patronato se encargaría de administrarla. Por su parte los estudiantes aportarían una cuota mensual de cien pesos, para sufragar gastos extras, pero aún con esta modesta cuota, vivir en la casa no podía compararse a lo que se pagaba en una casa de huéspedes normal, y en esto consistía precisamente la beca ofrecida, por lo cual habían solicitudes de las principales poblaciones de la entidad.

El requisito fundamental era que los alumnos deberían estar inscritos en una escuela de nivel superior, tener promedio de ocho, no reprobado el año lectivo, comprometerse a respetar el reglamento interno y traer consigo una carta de insolvencia económica, que podía estar avalada por el presidente municipal o el director de algún plantel educativo.¹¹²

Sin emitir por el momento un juicio sobre el desempeño de las CEP, basándome en los informes de las IPS de la Galería 2 del AGN, es posible afirmar que los miembros de éstas estuvieron en constante pugna con el gobierno y, específicamente, en contra de las autoridades de la SEP y del Patronato; ambas, más allá del apoyo de otras instituciones, eran las principales encargadas de coordinar y administrar las Casas. Las discrepancias entre las autoridades y los habitantes de las CEP en relación con el manejo del presupuesto y la imposición

¹¹¹ *Ibid.*, p. 12.

¹¹² *Ibid.*, p. 43-44.

de ciertos requisitos, como se verá más adelante, fueron motivo recurrente de conflictos.

2.2. Marchas y mítines en la articulación de una lucha política.

Las CEP eran políticamente activas, los reportes de las IPS de la segunda mitad de la década de los años setenta muestran a un estudiantado muy participativo. Tan sólo para el año de 1978 se encuentran en el AGN más de cincuenta informes en los que se da muestra del activismo de las Casas.

Cabe destacar que las intervenciones y los movimientos organizados por las CEP no velaban exclusivamente por sus intereses. De hecho, puede hablarse de una labor incluyente por parte de los estudiantes: sumar simpatizantes o adherirse a otras luchas era prioritario en su proceder. Esta postura había estado presente desde el movimiento del 68, los participantes percibieron la relevancia que adquiriría la unidad pero no calcularon bien los riesgos, según Luis González de Alba, los estudiantes:

creían que, a diferencia de lo acaecido con los ferrocarrileros en 1959, su movimiento resultaba más difícil de reprimir, ello por el apoyo de un segmento de la clase media (padres de familia, maestros y empleados); reconocían lo complicado que era integrar en el movimiento a obreros y sindicatos (debido a los mecanismos de control gubernamental), pero, a su vez, sabían que reprimir a varias Universidades, Escuelas, Institutos, etc., no sería sencillo.¹¹³

Así fue que, desde los años setenta los estudiantes buscaron la unión como defensa frente a una posible represión de las autoridades, donde la *panacea* en contra “del opresor gobierno burgués” era “la alianza obrero-campesino-estudiantil”, a la que se hace alusión en más de un reporte.¹¹⁴ Estas circunstancias explican la presencia y participación de algunos miembros de las

¹¹³ González de Alba, *Los días y los años*, p. 40.

¹¹⁴ “El Patronato de Asistencia a las Casas de Estudiantes de Provincia, firmó un convenio con 56 auténticos de ellos, pertenecientes al Estado de Baja California Norte, que fueron becados por el Gobierno de esa entidad”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-C, Expediente 10, f. 66, 1 de febrero de 1978. Véase también: *Ibid.*, ff. 70-75, 2 de febrero de 1978; *Ibid.*, ff. 157-158, 7 de febrero de 1978; *Ibid.*, exp. 11, ff. 276-296, 28 de febrero de 1978; *Ibid.*, exp. 14, ff. 36-62, 12 de abril 1978; *Ibid.*, caja 1613-A, exp. 4, ff. 84-87, 19 de septiembre de 1978.

Casas durante un mitin efectuado por empleados de *Acermex* en 1978, o bien, la intervención de trabajadores de *Sabritas* en los eventos estudiantiles.

Durante los mítines organizados por los miembros de las CEP, casi de manera sistemática, los grupos participantes ajenos al movimiento tomaban la palabra para manifestar su apoyo y hacer notar que estaban al tanto de la problemática (en estos casos casi siempre repetían la información más básica y general que ya se había comentado en el transcurso de la marcha), al tiempo que aprovechaban el escenario para sumar adeptos o simpatizantes a sus causas, o cuando menos, dar a conocer su situación.¹¹⁵ De tal modo que podían llegar a convivir en un mismo acto estudiantes, profesores, obreros, campesinos, sindicalizados, y cualquier agrupación que se preciara de enarbolar la bandera popular.

En general, durante la década de los setenta, podría decirse que el proselitismo estudiantil se presentó en distintos puntos de la ciudad; sin embargo, es comprensible que las instalaciones educativas fueran los principales focos de organización y difusión de las movilizaciones. Entre los planteles más participativos destacan las facultades de la UNAM (Ciudad Universitaria y los otros campus de Estudios Profesionales); las Vocacionales y las Escuelas Superiores del IPN (Zacatenco y el Casco de Santo Tomás principalmente); los CCHs y las Preparatorias de la UNAM; los planteles de la UAM; las Preparatorias Populares (“Mártires de Tlatelolco” entre las más activas) y la Escuela Normal Superior.

La actividad política estudiantil podría sintetizarse en la planeación de mítines, convocatorias masivas a las marchas, “pintas” de demandas y críticas al sistema gubernamental, repartición de volantes informativos, “pegas” y, como medida extrema, la toma de instalaciones públicas. De acuerdo con los informes de las IPS, el edificio de la SEP constituyó el blanco predilecto de las marchas; establecer plantones en sus patios fue también una medida recurrente de presión

¹¹⁵ “Marcha-mitin convocada por el Consejo Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia y la Escuela Normal de Maestros”, en AGN, Galería 2, fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-C, Exp. 14, ff. 36-62, 12 de abril de 1978.

estudiantil. Esta táctica fue inaugurada, según Barry Carr, desde mediados de mayo de 1958 por el MRM.¹¹⁶ La Secretaría de Gobernación y el Patronato también fueron edificios a los que solían dirigirse los estudiantes.

Los reclamos y las peticiones podían ir desde lo más general hasta lo más específico: desde el apoyo a la revolución nicaragüense, hasta la exigencia de la liberación de algún compañero; desde la crítica a las medidas económicas del presidente en turno en el plano nacional, hasta el cobro de la renta atrasada de alguna Casa en el plano local.

Así por ejemplo, el día 19 de septiembre de 1978 un grupo de estudiantes efectuó un mitin frente a la Secretaría de Gobernación, durante el cual se exigió información sobre el paradero de Juan Chávez Hoyos y Rufino Guzmán, compañeros integrantes del CNCEP presuntamente secuestrados por el gobierno.¹¹⁷ O bien, como ocurrió con las quejas hacia las medidas económicas impuestas por López Portillo; el 4 de abril de 1978, en la ENEP Cuautitlán, el CNCEP convocó a una marcha para reclamar y exponer los problemas de las Casas, pero se propuso aprovechar la ocasión para manifestarse en contra de la Alianza de la Producción, el Plan de Austeridad y el Plan Nacional de Educación, en una evidente desaprobación de las políticas del ejecutivo.¹¹⁸

En términos generales, las manifestaciones seguían siempre la misma línea: se pactaba el día y la hora, se elegía el lugar de salida (en repetidas ocasiones la Escuela Normal de Maestros), el destino (la SEP y con menor frecuencia el PPAEP¹¹⁹ o la SEGOB) y se hacía público el acto mediante volantes e invitaciones presentadas directamente en las escuelas mencionadas. Al llegar la

¹¹⁶ Carr, *op. cit.*, p. 218.

¹¹⁷ “Un grupo de estudiantes efectuó un mitin frente a esta Secretaría en el que exigió se investigue el paradero de Juan Chávez Hoyos y Rufino Guzmán”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-A, Expediente 4, ff. 84-87, 19 de septiembre de 1978.

¹¹⁸ “En la ENEP Cuautitlán, el Consejo Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia, por medio de un manifiesto da a conocer una marcha de la Escuela Normal de Maestros a la SEP, para el día 12 del actual”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-C, Expediente 13, ff. 152-153, 4 de abril de 1978.

¹¹⁹ Patronato para la Asistencia de Estudiantes de Provincia, en adelante me dirigiré a esta organización como “el Patronato” más que por sus siglas, puesto que es la manera en que la mencionan en los reportes de las IPS.

fecha señalada se marchaba sin mayores percances, siempre escoltados y vigilados por distintos dispositivos policiacos. Las voces de los jóvenes coreaban los nombres de sus figuras icónicas como la de Ernesto “el Che” Guevara, e injuriaban, con uno u otro mote, al tan odiado Estado burgués.

La dinámica estaba bien establecida, al final del trayecto debían esperar y ver si la fortuna lograba colocar a sus líderes frente al dirigente de la institución elegida como destino; o si, como ocurría generalmente, algún funcionario de menor jerarquía les vendía falsas esperanzas y compraba una paz que duraba hasta la próxima salida a las calles.

Así, en el mitin del 23 de febrero de 1978 un grupo de estudiantes consiguió entrevistarse con el subsecretario de Educación en la SEP, el licenciado Víctor Flores Olea, quien los invitó a que se reunieran —estudiantes y funcionarios de la SEP— el día 3 de marzo de dicho año. Los alumnos presentaron un pliego petitorio de seis puntos¹²⁰ y el licenciado se comprometió a evaluar las peticiones y a ayudarlos siempre y cuando comprobaran una apropiada situación académica.¹²¹ Como se había previsto, el día 3 de marzo de 1978 se llevó a cabo la reunión. Por parte de las autoridades se contó con la presencia de Juan Maldonado, presidente del Patronato, mientras que el licenciado Fernando Bello acudió en representación del titular de la SEP. Durante esa reunión se discutieron las demandas mencionadas y se acordó ofrecer una respuesta para el 29 de abril del mismo año, casi dos meses de espera y la resolución distó mucho de ser la esperada por los estudiantes.¹²²

Aunque evidentemente no pueden englobarse todas las características de las manifestaciones, vale la pena reseñar un mitin que a mi entender es

¹²⁰ Puntos del pliego petitorio: 1. Aumento general de subsidios; 2. Mejoramiento de la alimentación; 3. Creación de nuevas Casas de estudiantes; 4. Creación de bibliotecas; 5. Servicios asistenciales; y 6. La liberación de su compañero Enoc Escobar Ramos. En “Representantes de estudiantes, del Patronato de Asistencia a éstos y funcionarios de la SEP, se reunirán el próximo 3 de marzo para discutir las peticiones que harán los primeros”. AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-C, Expediente 11, ff. 212-213, 23 de febrero de 1978.

¹²¹ *Idem.*

¹²² “Será hasta el próximo 29 de abril cuando las autoridades de la SEP den respuestas a las peticiones del FNCEP, ANCE y UNCED”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-C, Expediente 12, ff. 44-45, 3 de marzo de 1978.

representativo y que servirá para ilustrar cómo procedían los grupos involucrados de acuerdo con los reportes de las IPS. Se trata de una marcha realizada el 12 de abril de 1978, que tuvo la particularidad de reunir un número importante de estudiantes. Fue convocada por el CNCEP y por la Escuela Normal de Maestros y contó con cerca de 3000 participantes.

Si señalo que llama la atención la cantidad de participantes es porque en el resto de las marchas reportadas difícilmente se juntaron unos cuantos cientos de personas, y sólo en algunas de ellas se rebasaron los 1000 asistentes. A su vez, el número de manifestantes implicó la presencia de un importante dispositivo policiaco comandado por la extinta Dirección General de Policía y Tránsito (DGPYT), la cual dispuso de 12 motocicletas, 33 patrullas y siete camiones con 60 granaderos cada uno, cifra que se aproxima a los 500 efectivos de seguridad.¹²³

En esa ocasión, el evidente y cercano cierre de las CEP fue el móvil de sus residentes,¹²⁴ quienes comentaban que el gobierno buscaba terminar con las Casas, no por ser refugio de delincuentes —como las autoridades sostenían—, sino porque en ellas se promovía la lucha popular, el activismo y la conciencia social. Esto último, decían los estudiantes, era lo que el Estado realmente temía de tales agrupaciones.¹²⁵

Desde el día 4 de abril los estudiantes comenzaron a difundir información sobre la marcha. En la ENEP Cuautitlán lo hicieron mediante un manifiesto en el que expusieron sus demandas principales, mientras que en Zacatenco y en el Casco de Santo Tomás la invitación se realizó con “pintas”. Un día después, el 5 de abril, la información se difundió con volantes en el CCH Vallejo y en la preparatoria

¹²³ “Marcha-mitin convocada por el Consejo Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia y la Escuela Normal de Maestros”, *op. cit.*

¹²⁴ La polémica por el cierre de las CEP comienza a finales de 1977 con la propuesta de la beca individual, tema que se tratará en el siguiente apartado.

¹²⁵ “Marcha-mitin convocada por el Consejo Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia y la Escuela Normal de Maestros”, *op. cit.*

Popular Mártires de Tlatelolco. La repartición de propaganda continuó en la ENEP Iztacala y en otras facultades de la UNAM, así como en los planteles del IPN.¹²⁶

Para el 11 de abril, un día antes de la marcha, se comentaba entre los estudiantes que participarían más de 50 Casas pertenecientes a la CNCEP, al FNCE, a la ANCE, al FICEM, entre otras asociaciones. También se hizo un llamado para solidarizarse con las demandas de la Escuela Nacional de Maestros y de la Escuela Superior de Economía del IPN, y se propuso permanecer en las instalaciones de la SEP una vez terminado el mitin hasta que se resolviera el pliego petitorio.¹²⁷

El 12 de abril se efectuó la marcha sin ningún reporte anómalo en la bitácora de las IPS. Los estudiantes gritaron las consignas habituales y no se exigió nada nuevo. Se suscitó un ligero enfrentamiento dentro de las instalaciones de la SEP, cuando un grupo de policías tuvo que detener por la fuerza a un contingente de 60 alumnos que pretendía entrevistarse con altos funcionarios de la Secretaría. Finalmente las autoridades aceptaron a una comitiva de 24 estudiantes, mientras que un grupo de manifestantes que permaneció en el patio quemaba un muñeco de cartón que representaba al Patronato y a su director.

Según el reporte, una vez que los estudiantes abandonaron el recinto se presentó un choque directo entre éstos y la fuerza pública frente al Palacio de Bellas Artes. En ese lugar, 200 granaderos con el apoyo del cuerpo de motociclistas dispersaron a los manifestantes, acción durante la cual resultaron lesionadas varias personas con heridas leves. Lo curioso fue que desde la tarde de ese día y durante el siguiente, los estudiantes se movilizaron con “mítines relámpago”, al

¹²⁶ *Vid.*, AGN, Galería 2, fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-C, Exp. 13, ff. 152-153, 157, 196, 201, 289-290, fechas 4, 5 y 10 de abril de 1978.

¹²⁷ “Después de la marcha que realicen mañana los integrantes de las Casas de Estudiantes de Provincia, tratarán de quedarse en las instalaciones de la SEP hasta que les resuelvan su pliego petitorio”, en AGN, Galería 2, fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-C, Exp. 14, ff. 15-18, 11 de abril de 1978.

tiempo que buscaban en hospitales y delegaciones a sus compañeros detenidos y/o heridos.¹²⁸

El 13 de Abril se realizó un mitin en el que se condenaron los hechos del día anterior. Se puso énfasis en la “represión brutal” por parte del gobierno hacia los estudiantes, se exigió la liberación de sus camaradas y se reprochó el uso del poder restrictivo por parte del Estado.

La reseña de este acontecimiento es evidencia del contraste existente entre el reporte oficial y las quejas estudiantiles; mientras que las autoridades hablan de “varias personas con heridas leves”, los manifestantes dan cuenta de una “represión brutal”. Aunque la discordancia se explica sola, la reacción airada por parte de los estudiantes haría suponer, que el uso de la fuerza pública fue más severo de lo que las autoridades reportaron.

2.3. Las CEP en contra del Patronato y las becas individuales

De todas las agrupaciones conformadas por las CEP, el Consejo fue sin duda la que tuvo más peso. No sólo contó en su haber con el mayor número de Casas afiliadas, sino que, su creación estuvo ligada a la lucha y defensa de las CEP. Se sabe que el Consejo adquirió un carácter de organización independiente de las políticas del Estado a partir del 5 de septiembre de 1974, fecha en la que fueron tomadas las oficinas del secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja, durante un mitin. Durante el acto se exigió la construcción de Casas “modelo”, se consiguió un aumento en el subsidio y se solicitó también la creación de nuevas Casas a fin de mejorar las condiciones de vida de los estudiantes.¹²⁹

¹²⁸ “Con motivo del mitin efectuado hoy en apoyo a las Casas de Estudiantes de Provincia, esta tarde se efectuó una asamblea extraordinaria en la Escuela Superior de Economía del IPN donde se acordó entre otros puntos, que se hará una concentración a las 17 horas de mañana en CU”, en AGN, Galería 2, fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-C, Exp. 14, ff. 64-65, 12 de abril de 1978.

¹²⁹ Lograron la edificación de la Casa de Oaxaca y de la Casa de Colima.

La respuesta del gobierno de Luis Echeverría ante la actitud independiente y participativa del Consejo, de acuerdo con los reportes estudiantiles de las IPS, fue la instauración de la ANCE. Organismo considerado por los habitantes de las Casas como un grupo porríf al servicio de la SEP, y cuya función, según se comenta, era desprestigiar la imagen de las CEP y frenar su desarrollo.¹³⁰ Empero, dicha medida resultó insuficiente para conseguir el control de las Casas, por lo que, también durante el sexenio echeverrista, se instauró el Patronato con la intención de que coordinara y administrara las CEP. Esta disposición colocó al nuevo organismo como la extensión y traba burocrática al servicio del Estado; y, por ende, en detrimento de las Casas.¹³¹ Incluso se comenta en los informes que el desvío de fondos, la infiltración de estudiantes y la misma intervención del Patronato coadyuvaron en el cierre de más de 180 CEP para 1978.¹³²

El Patronato se ubicaba en la calle Gauss no. 9 esq. con Mariano Escobedo, y estaba presidido por el licenciado Juan Maldonado Pereda. Personaje que a la postre sería el blanco principal de las quejas de los estudiantes de las CEP, por representar a una organización que, lejos de ayudarlos, contravenía sus intereses.¹³³

Entre los años de 1977 y 1978, el Patronato decidió aplicar una medida que puso en jaque la continuidad de las CEP: cambiar el subsidio de las Casas por becas individuales. Dicha medida se acordó durante el sexenio de López Portillo, cuando se propuso otorgar 2000 pesos a los estudiantes de nivel licenciatura y 1500

¹³⁰ “Declaración del Consejo Nacional de las Casas de Estudiantes de Provincia en la que se da a conocer la lucha del organismo y la defensa de las Casas”, en AGN, Galería 2, fondo SEGOB-IPS, Caja 1607-C, Exp. 8, ff. 283-284, 11 de marzo de 1976.

¹³¹ “Marcha-mitin convocado por el Comité Nacional de Casas de Estudiantes, con el fin de solicitar más becas y repudiar el desalojo de algunos de sus compañeros, en varias residencias, ésta se dirige a la SEP”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1601-C, Expediente 14, ff. 4-8, 29 de noviembre de 1979.

¹³² “Los estudiantes que están posesionados en la Casa de Baja California Norte, manifiestan que no la desalojarán hasta que el Patronato cumpla con lo dispuesto por el expresidente Echeverría”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-C, Expediente 10, ff. 227-228, 9 de febrero de 1978.

¹³³ “El cambio de pensiones a estudiantes de Casas de provincia, por becas, ha provocado la reacción de individuos enquistados en esas Casas que cometen ilícitos”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-C, Expediente 12, f. 111, 7 de marzo de 1978.

pesos en el nivel de educación media superior.¹³⁴ Lo anterior propició que se presentara una confrontación entre los miembros de las CEP y las autoridades. Por un lado, los estudiantes de provincia tachaban la medida de retrógrada, puesto que, según ellos, negaba oportunidades a los jóvenes y frenaba el desarrollo educativo del país. Mientras que para el gobierno, el otorgamiento de las becas individuales era la única forma de beneficiar a los estudiantes genuinos y de poner fin a la delincuencia y a las conductas negativas que habían proliferado en las CEP.

Uno de los primeros informes que da cuenta de dicha problemática corresponde a la relación del 24 de abril de 1978, en la cual los estudiantes criticaron directamente la política del Patronato de desaparecer las CEP. Aunque, a decir de las autoridades, se buscaba retirar el subsidio económico y las raciones alimenticias para sustituirlos por las becas individuales, terminar con la drogadicción y el pandillerismo de algunas Casas, así como desarticular o cuando menos desestabilizar a los grupos de activistas que habían estado agitando en las escuelas.¹³⁵ Ante esta situación estudiantado y gobierno mostraron una postura diametralmente opuesta.

Los estudiantes acusaban al Estado de buscar terminar con las CEP imponiendo la beca; exigiéndoles promedio de 9; reprimiendo y atemorizando a sus habitantes. Ante los embates del gobierno, los líderes de las Casas pedían a sus compañeros que no admitieran el cambio de subsidios por becas individuales, advirtiendo que era una estrategia de las autoridades para presionarlos.¹³⁶ Acusaban al sistema capitalista y se negaban a aceptar la “carnada burguesa” que eran las becas, pero también tenían presentes las desventajas que enfrentaban y reconocían que algunos compañeros habían aceptado la propuesta de las autoridades por temor a quedarse sin Casa y sin beca. Aunque en todo

¹³⁴ “El cambio de pensiones a estudiantes de Casas de provincia...”, *op. cit.*

¹³⁵ “Miembros de la Asociación Nacional de Casas de Estudiantes señalaron que el próximo día 30 desaparecerán los membretes de las Casas de Estudiantes pero que ellos seguirán unidos”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1610-A, Expediente 3, ff. 79-83, 24 de abril de 1978.

¹³⁶ “Ante la conversión de subsidios a estudiantes de Casas de provincia por becas, éstos contraatacarán con una manifestación el próximo día 19”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-C, Expediente 12, f. 104, 7 de marzo de 1978.

momento el discurso apuntó a seguir en lucha, se tenían dos antecedentes que insinuaban y alertaban sobre lo que podría llegar a suceder. El primero, el cierre del internado del IPN en 1956; el segundo, lo acontecido en 1977 en la Casa de Nayarit, en la cual los estudiantes aceptaron las becas individuales que meses más tarde fueron retiradas arbitrariamente para poner fin a la Casa.¹³⁷

Por su parte, el Patronato no dejaba pasar la ocasión para remarcar los logros y los avances obtenidos con la beca. El día 1° de febrero de 1978 presumían de haber firmado el convenio con 56 “auténticos estudiantes”. Un mes más tarde, el día 7 de marzo, señalaban que quienes realmente eran estudiantes ya habían aceptado con agrado dicha medida, puesto que era 200% más de lo que obtenían anteriormente; y acusaban de manera reiterada la presencia en las Casas de personas dedicadas a cometer fechorías, vender drogas y otras actividades ilícitas, personas que, a decir del Patronato, intentaban agitar a los estudiantes para entorpecer la buena disposición de las autoridades.¹³⁸

En esa línea, el 13 de marzo de 1978 el presidente del Patronato manifestó estar en negociaciones con cinco de las siete Casas de Michoacán, y adelantó que no tendrían ningún problema con ellos porque “son buenos muchachos”. Ese mismo día, se anunció que el Patronato ya había firmado la aceptación de la beca con habitantes de 50 CEP aproximadamente, reiterando que eran recibidas con beneplácito entre los verdaderos estudiantes.¹³⁹

Para el día 11 de abril, el Patronato presumía contar con la aprobación de la gran mayoría de las Casas. El secretario General del Patronato, Joaquín de la Llave, señaló que los estudiantes renuentes tenían 20 días para aceptar la beca

¹³⁷ “Marcha-mitin convocada por el Consejo Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia y la Escuela Normal de Maestros”, *op. cit.*

¹³⁸ “El cambio de pensiones a estudiantes de Casas de provincia...”, *op. cit.*

¹³⁹ “Los miembros del Patronato para la Asistencia de Estudiantes, han manifestado que las Casas de Michoacán no representarán ningún problema para el mismo”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-C, Expediente 12, f. 214; y “Se logró saber en el Patronato, que ya se ha firmado con aproximadamente 50 Casas de Estudiantes de Provincia en el Distrito Federal las becas económicas que otorga el Gobierno Federal”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-C, Expediente 12, f. 234, 13 de marzo de 1978.

individual, y de no hacerlo, advirtió, “el Patronato no tendrá ya ninguna relación con las CEP.”¹⁴⁰

Evidentemente, a pesar del supuesto éxito de la medida, las autoridades tenían conocimiento del conflicto que se desencadenaría con la instauración de las becas individuales. Incluso, el 28 de julio de 1978 el licenciado Juan Maldonado Pereda alertó sobre los problemas que se avecinaban con las CEP. El conflicto surgiría porque, para renovar la beca, los habitantes de las Casas deberían presentar documentación que los acreditara como estudiantes y tenían que cumplir con un promedio estipulado. Estos requisitos, adelantó el presidente del Patronato, no serían cubiertos por muchos miembros del CNCEP, lo que provocaría la suspensión del pago por parte de las autoridades y daría lugar a un malestar que detonaría reclamos y movilizaciones masivas.¹⁴¹

La cancelación de las becas individuales se sumó a las principales demandas del CNCEP y del resto de las agrupaciones de las Casas. La lista quedaría de la siguiente manera:

- Aumento del 100% del subsidio (en ocasiones pedían un incremento hasta del 200%).
- Cancelación de las becas individuales.
- Creación de nuevas Casas.
- Autonomía de las Casas de Estudiantes.
- Construcción de comedores, dormitorios y bibliotecas.
- Desaparición del Patronato.
- Liberación de presos políticos.

Hasta este momento, parecería que el gobierno y los estudiantes se encontraban en polos opuestos; que los unos repelían a los otros y que les resultaba imposible

¹⁴⁰ “Organizaciones que participarán en la manifestación de mañana de la Escuela Normal de Maestros hacia la SEP”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-C, Expediente 14, ff. 17-18, 11 de abril de 1978.

¹⁴¹ “El Presidente del Patronato para la Asistencia de Estudiantes de Provincia en el Distrito Federal manifestó que se avecinan problemas con los becarios por la aplicación del reglamento para la concesión de becas”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-B, Expediente 7, f. 221, 28 de julio de 1978.

conciliar intereses. Sin embargo, no sería acertado quedarse con esa lectura de la situación.

2.4. Conflicto de intereses: las CEP como instrumento político

El activismo y la capacidad de organización que mostraron las CEP podrían sugerir que se movían siempre en la misma dirección, que actuaban como un solo ente. Sin embargo, el proceder de las Casas estuvo supeditado, en menor o mayor medida, a la agrupación en la que se encontraban suscritas y al estado al que pertenecían. De tal modo que los intereses de las Casas podían estar íntimamente vinculados o ser diametralmente opuestos entre sí. Baste con recordar cómo fue que la Asociación Nacional de Casas de Estudiantes se creó en oposición al Consejo con la gente expulsada de este último.¹⁴²

En los años cincuenta la izquierda tenía en las universidades uno de sus principales bastiones; aunque dichas instituciones educativas no siempre estuvieron disconformes con el gobierno, incluso la UNAM mantuvo un perfil conservador hasta entrados los años cuarenta. Barry Carr señala que fue hasta la represión obrera del 58-59 cuando “las Universidades y los institutos de preparación de maestros, especialmente en el campo, surgieron como un terreno cada vez más importante de combate entre el estado y los movimientos populares.”¹⁴³

A partir de la década de los sesenta las universidades fueron utilizadas como escenario de lucha ideológica —con la intervención notoria del PCM y de otros grupos de izquierda—; del mismo modo, las CEP también fueron objeto del oportunismo político, tanto de algunos líderes de las Casas como de grupos ajenos a ellas. En los primeros meses de 1978 el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) estuvo presente en las manifestaciones de las CEP. La participación, en apariencia comprometida, del PRT en los movimientos

¹⁴² “Declaración del Consejo Nacional de las Casas de Estudiantes de Provincia en la que se da a conocer...”, *op. cit.*

¹⁴³ Carr, *op. cit.*, p. 232.

estudiantiles respondió en gran medida a su intención de ser incluido en los comicios que se avecinaban. Por lo que, con su postulación ante la Comisión Federal Electoral en puerta (programada para el 28 de abril de 1978), se hizo prioritario para el partido buscar el apoyo de la base estudiantil.¹⁴⁴ No obstante, la intromisión del PRT en los mítines de las Casas no fue más allá de la conveniencia electoral, es decir, únicamente se aprovechó la convocatoria de las CEP en aras de su labor proselitista, siendo ésta una expresión “moderada” del manejo y uso político de las Casas.

En términos generales, las CEP solían intervenir en diversas acciones ajenas a su función original, destacando entre ellas el uso que les dio el Estado como brazo de acción y la utilización como plataforma política por parte de los estudiantes. Los líderes de las Casas comenzaron a percibir y a disfrutar los beneficios de su posición. Algunos de ellos solicitaron abiertamente que se les ayudara a hacer carrera política en sus estados de origen.¹⁴⁵ Algunos más manifestaron otro tipo de intereses, pero en todo momento sacaron ventaja del poder de convocatoria de las Casas para respaldar sus causas. De tal modo que, las CEP, como grupos de acción política, dejaron de ocuparse de lo que hasta entonces les concernía ampliando sus demandas e intervenciones, y llegaron a utilizar, según palabras del secretario General del Patronato Armando de la Llave, los recursos destinados para el mantenimiento de las Casas para sustentar sus movimientos políticos.¹⁴⁶

Los intereses políticos de las CEP durante los setenta no sólo fueron diversos, sino que en ocasiones, resultaron contradictorios. De tal manera que el concepto de “Casas de Estudiantes de Provincia” no debe entenderse como si se tratara de un ente homogéneo. Como prueba de la complejidad existente entre las CEP

¹⁴⁴ “Se tiene conocimiento de que el Partido Revolucionario de los Trabajadores está infiltrando en el movimiento de las Casas de Estudiantes de Provincia y que prepara las fechas en que se efectuarán mítines para protestar por el cierre de éstas”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-C, Exp. 14, ff. 93-94, 13 de abril de 1978.

¹⁴⁵ “Los exdirigentes de las Casas de Estudiantes, pretenden mejores prebendas del Patronato para la Asistencia de Estudiantes de Provincia”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1601-B, Expediente 7, ff. 136-137, 24 de abril de 1979.

¹⁴⁶ “El Licenciado Armando de la Llave, Secretario General del Patronato, indicó que las demandas de los integrantes del Consejo Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia, son absurdas”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-C, Expediente 11, ff. 274-275, 28 de febrero de 1978.

sirva de ejemplo la toma en acción armada de la Casa del Estudiante Oaxaqueño por miembros de la Casa del Estudiante Sinaloense y de la Casa del Estudiante Tabasqueño (estas dos últimas, según se infiere de los informes de las IPS y de los diarios consultados, fueron operadas como “grupos de choque” pagados y manejados por funcionarios de la SEP).¹⁴⁷

La confrontación entre dichas Casas provocó una tensa situación que culminó con una balacera. Estudiantes del Consejo tomaron partido por sus compañeros oaxaqueños y acusaron a Marcelo Ramírez, funcionario de la SEP, de ser el actor intelectual de los hechos y “padrino” de los porros, y responsabilizaron también a Zárate Aquino, gobernador de Oaxaca.¹⁴⁸ A decir de los estudiantes oaxaqueños, el ataque hacia su Casa fue ordenado en represalia por su actitud solidaria con las luchas populares y estudiantiles de su estado, tal como el apoyo directo a la Universidad Autónoma Benito Juárez que se encontraba en pugna con el gobierno estatal en 1976.

La infiltración de estudiantes en las Casas por parte del gobierno las convirtió en “el último reducto de poder que ejercen los gobiernos de los estados”.¹⁴⁹ Es decir, para las autoridades estatales fueron espacios de control y vigilancia de la política nacional. Ello explica en buena medida el porqué de la preservación de las CEP a pesar de las cuantiosas quejas que de ellas se desprendían, en una situación que, a todas luces, se tornó en una lucha de poder entre las organizaciones que controlaban a las CEP.

Es un hecho que, con el paso de los años, las Casas fueron optimizando su organización y comenzaron a desarrollar mecanismos de presión que se tradujeron en la obtención de poder. En la segunda mitad de los años setenta, las CEP se encontraban acomodadas en diferentes agrupaciones políticas que ya no

¹⁴⁷ “Activistas del Consejo Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia, en un volante que distribuyeron en la ENE de la UNAM, condenan la forma violenta en que fue tomada la Casa del Estudiante Oaxaqueño. Culpando de ello a las autoridades de la SEP”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1607-C, Expediente 8, ff. 291-292, 11 de marzo de 1976.

¹⁴⁸ “Estudiantes del Consejo Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia se manifestaron en contra de los actos porriles en la Casa oaxaqueña”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1607-C, Expediente 8, ff. 237-238, 9 de marzo de 1976.

¹⁴⁹ “Los estudiantes que están posesionados en la Casa de Baja California Norte...”, *op. cit.*

respondían exclusivamente a los intereses del gobierno, y que incluso se convirtieron en una amenaza para el orden establecido. Las desavenencias impulsaron al gobierno a tomar nuevas medidas, desde la infiltración de uno o varios estudiantes, hasta el manejo de Casas completas o agrupaciones de ellas. Prueba de esto último, ya mencionado con antelación, fue la fundación del Patronato y de la Asociación, ambas, se comenta, con miras a cerrar las Casas. Sin embargo, la defensa organizada de los miembros las CEP orilló al gobierno a emplear otras tácticas.

El Patronato, como gestor burocrático de las Casas, fue mermando poco a poco la estabilidad de las mismas. Con el manejo y la repartición de los recursos económicos a su cargo, el licenciado Juan Maldonado dispuso de manera arbitraria del presupuesto, hecho que le ganó numerosas acusaciones de tráfico de influencias, así como críticas por brindar facilidades a las Casas registradas en la Asociación por “la amistad que guardaban entre sí”. Mientras tanto, para el resto de las organizaciones —el Consejo principalmente—, el apoyo se reducía y complicaba considerablemente.¹⁵⁰

Además, según testimonios de los estudiantes, los dirigentes del Patronato desviaban el subsidio para beneficiar sus intereses particulares, canalizaban recursos del presupuesto de la educación para fomentar y organizar grupos porriles,¹⁵¹ y promovían la clausura de las Casas a cambio de la beca individual. Por último, y como medida más contundente, se llevó a cabo la publicación de un decreto presidencial el día 26 de febrero de 1980 en el Diario Oficial, en el que se estipulaba la desaparición del Patronato y se dictaminaba el retiro incondicional de las becas al término del año escolar en turno para estudiantes de preparatoria

¹⁵⁰ “Integrantes de las Casas de Estudiantes de Provincia se muestran inquietos ante la próxima renovación de convenios con el Patronato, asimismo consideran la actuación del Licenciado Juan Maldonado, como parcial”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-C, Expediente 10, ff. 13-14, 31 de enero de 1978.

¹⁵¹ Sobre dicho desvío de fondos se acusa directamente a Marcelo Ramírez y Ulises Montoya, director y subdirector, respectivamente, de Educación extraescolar en el medio urbano. Acusando que, a través de ellos, grupos de porros eran pagados y manejados por la SEP. En “Activistas del CNCEP, en un volante que distribuyeron en la ENE...”, *op. cit.*

y vocacional, mientras que a los alumnos de licenciatura se les conminaba a trasladarse a las universidades de sus estados.¹⁵²

De ese modo, tal como ocurrió con los movimientos populares de otros períodos y de otros sectores, el Estado utilizó los recursos necesarios para implantar el orden que le convenía cuando lo ameritaba. Sin embargo, al permitir y en ocasiones fomentar la estadía de grupos porriles entre los muros de las CEP, los inmuebles pensados para alojar estudiantes verían como su carácter era profundamente trastocado.

¹⁵² “En la Escuela Nacional de Maestros, hasta el momento hay aproximadamente 150 estudiantes de esta escuela y de Casas de Estudiantes quienes marcharán a la SEP, en donde harán un mitin para exigir a las autoridades les resuelvan sus peticiones”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1609-D, Expediente 16, ff. 8-22, 12 de marzo de 1980.

Capítulo 3. La imagen de las CEP

3.1. El discurso: burgueses contra proletarios

La imagen que los habitantes de las CEP generaron ante la opinión pública, y ante la sociedad en general, puede ser analizada desde dos ópticas que contrastan entre sí. Por un lado, como estudiantes pertenecían a alguna institución educativa y estaban pendientes de la situación política del país, mostrándose participativos junto a sus compañeros en la defensa de sus derechos. Por otra parte, como miembros de las Casas solían ser vistos con recelo por la ciudadanía debido a la violencia que en dichos espacios se generó. Esta última apreciación se desprende de algunas notas periodísticas y, primordialmente, de la memoria colectiva de quienes convivieron con moradores de las CEP o que incluso habitaron en ellas.¹⁵³ Pero, ya fuera que utilizaran el discurso político en las calles como estudiantes, o el poder de las armas en el interior de las Casas y sus alrededores, en ambos casos su actuación repercutió, en menor o mayor medida, en los intereses del Estado.¹⁵⁴

Francisco López Cámara refuerza esa idea al señalar que, durante los años setenta, una preocupación para el sistema eran los jóvenes, quienes exigían y se manifestaban en busca de una mejor posición en el futuro, veían por él y pedían más oportunidades, al mismo tiempo que reprochaban la falta de democracia y las injusticias sociales. De modo que, según López Cámara, un rasgo peculiar de la protesta juvenil era la negación de las formas vigentes que generaba una doble imagen: “actos irracionales de rebeldía sin causa; y también, la tendencia a participar en causas concretas, principalmente de orden político.”¹⁵⁵ En efecto, esas dos posturas contradictorias serían las lecturas más inmediatas y las que ambos bandos defendieron desde su perspectiva y conveniencia; así donde las

¹⁵³ Como adelanté en la Introducción, aun sin contar con una guía de entrevista, sostuve numerosas charlas con gente relacionada directamente con las CEP.

¹⁵⁴ Incluso cuando el mismo gobierno llegó a utilizar a los miembros de las CEP como grupos de choque, la sensación que se generaba en el resto de la población era de desconcierto, lo que derivó en reclamos hacia las autoridades y cuestionamientos sobre la pertinencia de las Casas.

¹⁵⁵ López Cámara, *op. cit.*, p. 90.

autoridades veían manifestaciones sin sentido y sin razón, los estudiantes veían la defensa de sus derechos.

La postura de los estudiantes parecía estar claramente inclinada hacia la izquierda, por lo menos en el papel. Esa tendencia puede explicarse en buena medida a través de la interpretación propuesta por Barry Carr, en el sentido de que, al comienzo de la década de los setenta, tuvo lugar un proceso que alteró la composición de la izquierda mexicana: la conquista de un importante espacio en las universidades estatales a cargo del PCM y otros grupos de la izquierda radical.¹⁵⁶ Este hecho, comenta Barry Carr:

Alentó un enorme florecimiento de la cultura y el debate marxista, sin igual en ningún otro país de América Latina. El reclutamiento masivo de investigadores de izquierda transformó la enseñanza de las ciencias sociales, particularmente la economía, las ciencias políticas y la sociología, y la huida a México de cientos de exiliados socialistas de Chile, Uruguay y Argentina a partir de 1973 acentuó aún más el giro a la izquierda.¹⁵⁷

Esta situación incluso pudo apreciarse en los libros de texto gratuito del periodo que va de 1972 a 1978; éstos, a diferencia de aquellos que fueron publicados entre 1959 y 1964, contenían entre sus páginas textos sobre el marxismo, la revolución cubana y la revolución china, lo que significó una evidente apertura temática y otro “triumfo” para la izquierda en México.¹⁵⁸

No es de extrañar que en la década de los setenta una buena parte del estudiantado y de los intelectuales simpatizaran abiertamente con el izquierdismo. Según Claudia Gilman, esta situación pertenece al bloque temporal sesenta/setenta y se caracteriza por “el intenso interés por la política y la convicción de que una transformación radical, en todos los órdenes, era inminente”.¹⁵⁹ Si bien la efervescencia ideológica estuvo presente en diversas partes del mundo, lo cierto es que, para el caso de México, la Revolución cubana ejerció una notable influencia. El nexo latinoamericano, la relativa cercanía y el

¹⁵⁶ Carr, *op. cit.*, p. 245.

¹⁵⁷ *Ibid.*, p. 246.

¹⁵⁸ Loaeza, *op. cit.*, p. 400.

¹⁵⁹ Claudia Gilman, *Entre la pluma y el fusil: debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina*, p. 39.

éxito conseguido fueron factores que indujeron a más de un mexicano a inspirarse en el movimiento de los revolucionarios cubanos y a adoptar, o cuando menos simpatizar, con sus posturas. Gilman sostiene que

La Revolución Cubana proporcionó la prueba más evidente no sólo de la existencia del fermento revolucionario sino también de la posibilidad del triunfo y la reconstrucción de la sociedad sobre bases enteramente nuevas. Esa revolución señaló un camino para el continente latinoamericano y fue seguida con una atención especial, mezcla de admiración y perplejidad en otras regiones.¹⁶⁰

De este modo, comprendieran o no las corrientes ideológicas y el sentido de los movimientos revolucionarios, los estudiantes estaban familiarizados con la terminología en boga —que expresaban en las manifestaciones— y se asumían como representantes de las luchas populares en contra del gobierno opresor. Así lo hicieron notar en repetidas ocasiones; por ejemplo, ocurrió durante la queja realizada por el CNCEP el 7 de febrero de 1978 en el CCH Vallejo, en la que se denunció la injustificada expulsión de 14 miembros de la Casa del Estudiante de Baja California Norte por supuesto tráfico de drogas. Sostenían que se trataba de otra “asquerosa maniobra” del Estado burgués mexicano con el fin de desaparecer las Casas. Advertían que el estudiantado unido no iba a permitir que se cumpliera dicho objetivo, apoyados en la participación política a un nivel social en pro de los intereses del proletariado. Y remarcaban su postura con pintas como las siguientes: “Por la participación de la juventud en la Revolución Democrática Social” y, “Organicemos la alianza obrero-campesino-estudiantil para darle a la burguesía”.¹⁶¹

Con ese mismo discurso, el CNCEP exigía soluciones al “gobierno fascista” en un mitin efectuado el 28 de febrero de 1978, en el que se aludía a la incapacidad de las autoridades para resolver los problemas de las “clases desheredadas” y se criticaba la negativa dependencia de nuestro país hacia el “imperialismo

¹⁶⁰ *Ibid.*, p. 370.

¹⁶¹ “A través de pintas en el CCH Vallejo integrantes del Consejo Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia denuncian que el Patronato se ha entrometido en la vida de la comunidad de la Casa del estudiante de Baja California Norte, tratando de desprestigiarla para posteriormente desaparecerla”, en AGN, Galería 2, fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-C, Exp. 10, ff. 157-158, 7 de febrero de 1978.

yanqui”.¹⁶² En otra ocasión, durante la marcha del 12 de abril de 1978, los estudiantes coreaban: “El Patronato fascista, no daremos ni un paso atrás”, “Alto a la represión, movimientos democráticos” y “Detendremos la avanzada fascista, la Universidad será para el pueblo”.¹⁶³ Señalaban además, que la crisis mundial en que se encontraba el capitalismo se reflejaba en México, por lo cual, decían, la burguesía estaba tratando de destruir las organizaciones obreras y estudiantiles.

Si bien resulta complicado ubicar al estudiantado dentro de una clase social, intentar situarlo dentro de una línea ideológica se antoja más complejo y arriesgado, por no decir imposible. En lo que a la posición social se refiere, una buena parte de los estudiantes pertenecía a la clase media o pretendía ingresar en ella. Sin embargo, por política de las Casas, sus habitantes provenían de un estrato social bajo. En lo que respecta a la ideología, solían apoyar las luchas populares, simpatizando con las posturas de la izquierda. “Con el marxismo, leninismo pensamiento Mao Tse-Tung”, corearon en señal de empatía durante la ya citada marcha del 12 de abril de 1978.¹⁶⁴ Empero, la simple mención de las corrientes ideológicas por parte de los estudiantes no es suficiente para conocer el bagaje y el nivel de comprensión que poseían sobre ellas.¹⁶⁵

Finalmente, la lectura que resulta del análisis de las marchas y de los mítines conduce hacia la simplificación del discurso, puesto que, justificada o injustificadamente, todo aquel que se oponía a los intereses del estudiantado era

¹⁶² “Marcha-mitin organizada por el Consejo Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia, de la Escuela Normal Superior a la SEP” En AGN, Galería 2, fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-C, Exp. 11, ff. 276-296, 28 de febrero de 1978.

¹⁶³ *Idem.*

¹⁶⁴ “Marcha-mitin convocada por el Consejo Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia y la Escuela Normal Superior...”, *op. cit.*

¹⁶⁵ En este punto vale la pena mencionar la crítica de Luis González de Alba hacia sus compañeros del movimiento del 68, comenta: “Y un día mandamos todo al carajo. No por Marx, sino por Reich. Fue una fiesta, una explosión luego de 50 años de buen comportamiento. De Vallejo y Campa apenas ayer habíamos oído hablar, pero qué divertida era la fiesta, las calles hechas nuestras, el carnaval, la pereza, el tráfico detenido, el desmadre, la súbita hermandad entre desconocidos, la siempre ajena ciudad ahora apropiada, la seguridad y la protección cálida proporcionada por la solidaridad que nos envolvía”, crítica que abre una incógnita para el caso de las CEP y sus marchas ¿mero relajó o conciencia social? difícil responder. Luis González de Alba, 1968: *La fiesta y la tragedia*.

burgués, así como todos quienes los apoyaban pertenecían a la clase proletaria. Era la lucha de los proletarios contra los burgueses, de la conciencia contra la ambición, de la democracia contra la arbitrariedad, o por lo menos así lo expresaban los estudiantes.

3.2. El carácter delictivo de las CEP

La opinión popular puede carecer de rigor analítico; la opinión de la prensa puede desvirtuar y ser manipulada, pero la violencia reportada en el interior de las CEP se podría atenuar mas no negar. El testimonio que Amir Gómez León ofrece en su obra, relacionado con la evolución de la conducta en la Casa del Estudiante Chiapaneco, es revelador. Claro está que, por más que se pueda extrapolar hacia otras Casas, la lectura de los acontecimientos narrados debe entenderse como indicador de un caso específico y no como una regla general.

Cuando la Casa del Estudiante Chiapaneco abrió sus puertas, en el año de 1964, contaba con espacio para 27 personas (27 camas); tenía un horario máximo de ingreso que se obedecía (8:00 pm), y sus dirigentes eran respetados y elegidos libremente. Conforme fue pasando el tiempo comenzaron a transgredirse ciertas normas: el inmueble llegó a dar alojamiento a más de 50 habitantes, muchos de ellos no eran estudiantes. La organización interna se fragmentó luego de un pleito entre estudiantes de la costa con estudiantes de los altos chiapanecos. Y, más grave aún, a raíz de la agresión cometida por un grupo de pandilleros de la colonia, los habitantes de la Casa se hicieron de cadenas, manoplas y una que otra pistola para defenderse.¹⁶⁶ Como se aprecia, las condiciones dentro de la Casa del Estudiante Chiapaneco distaron mucho de ser las estipuladas inicialmente, y a la larga, el mal manejo del inmueble, sumado a la intención del gobierno Federal de cerrar las CEP, puso fin a su existencia en el año de 1976, 12 años después de su apertura. Así lo explica Gómez León:

se dio una paulatina descomposición interna dentro de la casa, y así mientras por un lado, el grupo dominante ya no tuvo oposición del grupo de estudiantes

¹⁶⁶ Gómez León, *op. cit.*, p. 117.

de Soconusco o de otro similar, se descuidó el cumplimiento del reglamento interno, al grado que se abusó de la ingestión de bebidas alcohólicas, introducción de mujeres al interior de la casa y el decrecimiento en el nivel de excelencia académica que tuvieron las primeras generaciones [...] Por lo anterior, se descuidó la principal cualidad de sus miembros, ser estudiantes regulares; y esto tuvo como principal consecuencia el relajamiento interno que llegó a ser insoportable, pues la mayoría andaba armado, llevaban a comer a amigos y amigas, no hacían el aseo, se extraviaban cosas y lógicamente la despensa ya no alcanzaba para mantener a esta población adicional [...] Al no tener la presión de un grupo opositor, de un reglamento, de un patronato o de una directiva fuerte, los estudiantes se empezaron a normar por un consejo interno, dónde todos pretendían tomar decisiones y disfrutar canonjías especiales. Lejanos quedaron los días en que el reglamento interno se cumplía por sobre todas las cosas.¹⁶⁷

Al respecto, lo referido por Leonardo Salcedo, y corroborado por habitantes actuales de la Casa del Estudiante Duranguense, parece seguir la misma línea. En dicha Casa, pensada para un máximo de 65 habitantes (cifra que, por las dimensiones del espacio se antoja excesiva), llegaron a residir cerca de 80 moradores entre estudiantes, trabajadores, parejas y desempleados. Algunos de ellos, se comenta, portaban armas de fuego y eran vistos con recelo por los vecinos de la colonia.¹⁶⁸

Si bien éstos podrían ser los casos más ilustrativos, la documentación que da cuenta del relajamiento de la moral y de las malas conductas en las CEP es numerosa. Inclusive, el nivel de criminalidad que se presentó en algunas Casas hizo que la tranquilidad de la zona en la que se localizaban disminuyera considerablemente. Lo que llama la atención es el hecho de que las agresiones de los miembros de las CEP podían ir en todas las direcciones, a saber, se presentaron riñas entre las propias Casas (ya fuera por órdenes de quienes las controlaban o por simples desacuerdos); hubo abusos y pleitos con los vecinos de las colonias a las que pertenecían, y también se dieron enfrentamientos directos con órganos del Estado.¹⁶⁹

¹⁶⁷ *Ibid.*, pp. 154-155.

¹⁶⁸ Salcedo Bonilla, *op. cit.*, p. 25.

¹⁶⁹ En los reportes de las IPS no encontré quejas de los vecinos hacia los habitantes de las CEP, ese tipo de conflictos aparecen más bien en las notas periodísticas y en la memoria colectiva; si bien pueden ayudar a ilustrar esta sección, prefiero dejarlas para abordar la opinión pública.

Contrario a lo que podría suponerse, los choques entre las CEP y las autoridades no fueron ni los más frecuentes ni los más violentos. De hecho, en los informes de las IPS, más allá de las mutuas desacreditaciones entre “estudiantes disolutos” y “gobernantes tiranos”, son contadas las denuncias relacionadas con actos violentos. Por parte del gobierno abundan las quejas en torno al carácter delictivo de los residentes de las Casas —catalogados de porros, criminales, pandilleros, drogadictos—, pero casi siempre de manera genérica más que denuncias directas. Es decir, para las autoridades los estudiantes eran un grupo conflictivo *per se*, y sólo en ocasiones se actuó sobre una Casa o algún líder en específico. Otro tipo de altercados pudieron suscitarse durante las marchas, pero las autoridades no reportaron mayores incidentes ni agresiones estudiantiles, incluso durante la toma de las instalaciones gubernamentales se actuaba ordenadamente.

De acuerdo con los informes de las IPS, el orden en la conducta estudiantil fue más común de lo que podría pensarse y contrasta con el comportamiento que se detalla en las notas del periódico *Avance, el Diario de la capital*. En una de sus notas se destaca la expulsión y detención de varios de los 300 estudiantes que tenían tomadas por la fuerza las oficinas del Gobierno del Estado de Zacatecas. La finalidad de tal medida era exigir un aumento en el subsidio de la Casa de dicho estado, pero, lo que pudo ser la demanda de una causa justa terminaría por revelar la irreverencia de los estudiantes, quienes, de acuerdo con la nota del diario *Avance*, hicieron grandes destrozos en el inmueble e introdujeron una importante cantidad de bebidas embriagantes.¹⁷⁰

Los estudiantes por su parte, eran más enérgicos con sus demandas, y aunque también criticaban de forma generalizada al “gobierno opresor”, se tiene un mayor número de registros en los que sus reclamos fueron específicamente dirigidos. El día 3 de octubre de 1977, un grupo de líderes del CNCEP se presentó ante la Secretaría de Gobernación para denunciar las transgresiones a los derechos individuales de su compañero Jesús Vicente Vázquez, apresado en Puebla,

¹⁷⁰ Ernesto Lara, (25/9/1976). “Expulsados los revoltosos de la Casa del Estudiante de Zacatecas”. *Avance*. p. 16.

cometidas durante su detención y el proceso judicial. Los manifestantes acusaron a las autoridades de torturar a su compañero hasta hacerlo confesar diversos crímenes como asociación delictuosa, asalto a mano armada, robo, entre otros. Sostenían que su compañero solamente aceptó los cargos por la tortura a la que fue sometido y que continuaba desaparecido.¹⁷¹

En otro caso, cerca de 500 personas efectuaron un mitin frente a la Secretaría de Gobernación el 15 de noviembre de 1979. El motivo fue la intrusión de granaderos a la Casa del Estudiante Sinaloense y la detención de varios de sus habitantes. Los estudiantes reclamaron que las autoridades habían ingresado al inmueble por la fuerza y que además habían tomado pertenencias y dinero de sus moradores.¹⁷² Sin importar que la Casa de los Sinaloenses destacara de entre todas las demás por ser la más conflictiva, las quejas hacia la intervención policiaca fueron airadas, y, como solía ocurrir en esos casos, acusaron a los elementos de seguridad de atropellar los derechos de los estudiantes.

Cuando el conflicto era entre dos o varias Casas o entre miembros de las mismas, el ambiente se tornaba tenso. Los beneficios que se obtenían con el control de las CEP eran cotizados y propiciaron más de una riña, ya fuera por tener posiciones encontradas o como respuesta a alguna orden dada por los altos mandos con miras a desestabilizar o controlar la situación. Así por ejemplo, en respuesta a los intereses del Patronato, el 22 de julio de 1976 un grupo de más de 30 individuos dirigidos por Enoc Escobar Ramos, armados con pistolas, tubos, navajas y bombas molotov, allanaron dos Casas del Estudiante del Sureste, una en la calle Tepeyac núm. 145, colonia Industrial, y la otra en Iztapalapa. Fue necesaria la

¹⁷¹ “Un grupo de líderes del Consejo Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia, hoy se presentó a esta Secretaría a denunciar violaciones en la detención y proceso de Jesús Vicente Vázquez”, en AGN, Galería 2, fondo SEGOB-IPS, Caja 1605-D, Exp. 17, ff. 48-50, 3 de octubre de 1977.

¹⁷² “Manifestación y mitin en la Secretaría de Gobernación por alumnos de la preparatoria Popular y de los estudiantes de la Casa de Sinaloa”, en AGN, Galería 2, fondo SEGOB-IPS, Caja 1602-D, Exp. 15, ff. 1-11, 15 de noviembre de 1979.

intervención de la Policía Judicial del Distrito Federal para frenar las hostilidades.¹⁷³

En un caso similar, estudiantes sinaloenses y tabasqueños tomaron por la fuerza de la Casa del Estudiante Oaxaqueño, localizada en Palenque núm. 267, colonia Narvarte, luego de que se suscitó una balacera, expulsaron a los habitantes y mantuvieron secuestradas a dos de sus moradoras. Este conflicto, motivado por intereses políticos, también requirió la mediación de las autoridades.¹⁷⁴ No obstante, en este tipo de acontecimientos la participación policiaca buscaba conciliar, más que solucionar de fondo dichos conflictos. Es decir, la policía intervenía para reestablecer “el orden” y, a lo sumo, efectuaban algunas detenciones, sin que por ello los líderes o el resto de los miembros de las Casas modificaran su conducta.

Como ejemplo de los enfrentamientos dentro de las CEP está el caso de la Casa del Estudiante de Baja California Norte y el de la Casa del Estudiante Guerrerense. En ambos casos se trató de una disputa que culminó con la imposición de un grupo y la expulsión de otro. Aquí nuevamente se aprecia la defensa de las posturas a través de los discursos, un grupo estaba constituido por los “porros” que sembraban la anarquía mientras que los miembros del otro grupo se asumían como los “verdaderos moradores”. En ambos acontecimientos destacó el uso de armas de fuego, armas blancas, piedras y bombas molotov como medios para lograr su cometido.¹⁷⁵

En suma, fueran o no las CEP esencialmente delictivas, lo cierto es que un sector de la prensa se ocupó de desprestigiarlas.

¹⁷³ “Atacan temibles ‘porros’ a dos Casas de estudiantes”, en AGN, Galería 2, fondo SEGOB-IPS, Caja 1607-D, Exp. 14, f. 139, 22 de julio de 1976.

¹⁷⁴ “Estudiantes sinaloenses y tabasqueños, en acción armada, se posesionaron de la Casa del Estudiante Oaxaqueño y mantienen secuestradas a dos de sus moradoras”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1607-C, Exp. 8, f. 226, 8 de marzo de 1976.

¹⁷⁵ “En la UNAM, los verdaderos moradores de la Casa del Estudiante Guerrerense desconocerán a los dirigentes”, en AGN, Galería 2, fondo SEGOB-IPS, Caja 1607-C, Exp. 8, ff. 76-77, 18 de febrero de 1976.

3.3. La opinión pública: ¿Albergues de estudiantes o refugios de delincuentes?

En palabras de los estudiantes “la prensa es el arma del Estado, mal informa al pueblo.”¹⁷⁶ En efecto, los medios de comunicación, en este caso la prensa, fueron otro de los recursos con los que contó el gobierno para mantener el orden político y social. Se trataba de un régimen sólido capaz de aceptar, con relativa tranquilidad, a la oposición, más que por madurez política, por el dominio que ejercía sobre el entorno. Según Enrique Semo

El control de las grandes organizaciones populares no admitía excepción. Las elecciones eran usadas para renovar el consenso de las mayorías y el persistente fraude recordaba a los ciudadanos que si bien podía opinar sobre sus gobernantes, no podían elegirlos. Las oposiciones eran manipuladas para mantener una ilusión de pluralidad, sin permitir jamás desarrollos peligrosos.¹⁷⁷

No obstante, el mismo Semo apunta que, a partir de la década de los setenta, los retos que debió enfrentar el Estado en relación con los grupos de oposición se hicieron más frecuentes y perentorios, pero sin llegar a afectar en demasía los mecanismos del control gubernamental. Afirma que, “la creciente dificultad para impedir o controlar las movilizaciones populares no ha afectado su aptitud para cooptar o neutralizar a los dirigentes de la oposición.”¹⁷⁸ Así, la criminalidad de las CEP en ocasiones se toleró porque era impulsada por el propio gobierno, y en otras porque no representaba un riesgo mayor. Incluso, según se observará, en algunas Casas la violencia llegó a presentarse de manera sistemática, y sus habitantes asaltaban a transeúntes y comerciaban droga diariamente, sin que por ello las autoridades tomaran medidas inmediatas o contundentes.

¹⁷⁶ “Concentración en la SEP de estudiantes residentes en Casas de provincia”, en AGN, Galería 2, Fondo SEGOB-IPS, Caja 1613-C, Exp. 13, f. 6, 16 de marzo de 1978. En otro hecho similar a los anteriores, cerca de veinte pandilleros armados con cuchillos y pistolas asaltaron la Casa del Estudiante Guerrerense ubicada en Santa María la Redonda no. 13, colonia Guerrero; también golpearon y amenazaron de muerte a quienes ahí se encontraban, todo porque estaban inconformes con las elecciones internas previstas a realizarse. (No lo incluyo en el cuerpo de la tesis porque la fecha está fuera del periodo estudiado) S/a, (6/9/1970). “Policías tras los porristas que evitaron las elecciones”. *Avance*. p. 9.

¹⁷⁷ Semo, *op. cit.*, pp. 127-128.

¹⁷⁸ *Ibid.*, p. 131.

Si bien el diario *Avance* priorizó la nota roja entre sus páginas, lo cierto es que los miembros de las CEP le proporcionaron el material idóneo para fomentar dichas publicaciones y crear una imagen delictiva sobre sí. En una nota publicada el 9 de marzo de 1976 escrita por Ernesto Lara, reportero frecuente en noticias de este corte, se narra el multicitado suceso de la toma de la Casa del Estudiante Oaxaqueño. La información que aporta el diario es similar a la que se reportó en las IPS sobre el caso en cuestión. El único dato que difiere es el relacionado con el número de secuestrados, Ernesto Lara habla de que se tenía en la casa “por lo menos a 6 personas secuestradas”,¹⁷⁹ mientras que las investigaciones de la Segob señalan que se retuvo únicamente a dos mujeres.¹⁸⁰

Desde 1975 comenzaron a observarse una serie de ataques directos hacia las Casas, perpetrados en apariencia por grupos porriles miembros de las mismas CEP. Sin que se esclareciera el móvil ni el detonante de dichos acontecimientos —tal vez sólo con un afán desestabilizador—, estos grupos consiguieron enrarecer el entorno en el interior de las Casas y mostraron una imagen de completa inestabilidad. El 10 de mayo de 1975, un grupo de "antiestudiantes" irrumpió en la Casa del Estudiante núm. 11, en la colonia Morelos, iban armados con pistolas y lanzaron bombas molotov con el objetivo de retirar del lugar a Juan Marín, habitante de dicha Casa. Se desconocía su paradero pero se supo que los porros iban buscando venganza.¹⁸¹

Año y medio después, bajo esa misma línea, se reportó un ataque en la Casa del Estudiante Chiapaneco, ubicada en San Borja núm. 909 esquina con Nicolás San Juan. El representante de la casa, Jesús Vázquez Molina, señaló que ocho residentes fueron expulsados del inmueble por personas desconocidas que entraron armadas a amenazar. En la misma nota se menciona que se desconocía

¹⁷⁹ Ernesto Lara, (9/3/1976). “Varios detenidos y más de 10 lesionados en un enfrentamiento entre estudiantes”. *Avance*. p. 12.

¹⁸⁰ Desconozco cuál es el dato correcto aunque de igual modo la cifra no es algo trascendental. Bien podría ser que el número proporcionado por el *Avance* estuviera “inflado” para realzar la nota o que el número de las autoridades se hubiera modificado para no “alarmar” a la población.

¹⁸¹ Ernesto Lara, (10/5/1975). “Los porristas desatan una ola de violencia en contra de los estudiantes”. *Avance*. p. 12.

el móvil pero que la ola de terror que se había apoderado de las CEP continuaba atacando.¹⁸²

Evidentemente, no todos los actos de violencia fueron premeditados o producto de un móvil intrincado, en ocasiones bastaba con un simple malentendido. El 2 de octubre de 1976, la situación se salió de control luego de que una simple disputa en medio de una fiesta terminara en riña. A la 1:30 de la madrugada en la Casa del Estudiante Zacatecano, calle Francisco Pimentel esquina con Gabino Barreda en la colonia San Rafael, cerca de 200 estudiantes zacatecanos, guerrerenses y tabasqueños transformaron la reunión en tragedia tras perder el juicio y comenzar a disparar, situación que desencadenó en la muerte de un individuo y varios heridos de bala.¹⁸³

El 1 de febrero de 1977, como parte de una supuesta campaña de "limpieza" de las CEP, en este caso en la Casa del Estudiante Oaxaqueño, se logró la captura de tres porros perseguidos por el cargo de asalto a transeúntes y taxis.¹⁸⁴ Sobre la campaña para "limpiar" las Casas, que si bien era una medida recomendable, no se encontró otra mención, podría ser solamente parte de un discurso pero en todo caso desconozco su continuidad y sus alcances.

Meses más tarde, el 23 de noviembre de 1977, la policía consiguió capturar al peligroso delincuente estudiantil, Enoc Escobar Ramos, "el Enoc", señalado como el líder de un grupo de porros al que se le atribuyeron diversos crímenes como robo y allanamiento de morada entre los más destacados. Al parecer, una veintena de sujetos intentó liberar a su compañero durante la captura atacando con bombas molotov, palos y botellas, pero la policía logró retenerlo.¹⁸⁵

¹⁸² S/a, (3/12/1976). "Vuelve la inquietud en las casas estudiantiles". *Avance*. p. 14.

¹⁸³ Ernesto Lara, (2/10/1976). "Un muerto, varios heridos y docena de detenidos en un zafarrancho estudiantil". *Avance*. p. 14.

¹⁸⁴ Ernesto Lara, (1/2/1977). "Tres porros capturados". *Avance*. p. 10.

¹⁸⁵ Ernesto Lara, (23/11/1977). "Peligroso porro capturado tras enfrentarse con la policía". *Avance*. p. 12.

Los actos delictivos generados por los miembros de las CEP repercutieron también en la seguridad de las colonias en que se ubicaban. Más allá de que en ocasiones los habitantes de las Casas fueran los agredidos por grupos de criminales locales,¹⁸⁶ lo cierto es que los vecinos de las CEP tenían razones de sobra para desconfiar y sentirse amenazados.¹⁸⁷ Luego de una serie de delitos que se cometían casi diariamente por habitantes de la Casa del Estudiante Sonorense, un ingeniero golpeado y asaltado frente a dicho inmueble levantó una denuncia. En la nota se destaca que se había convertido en una casa de pandilleros sonorenses, incluso dos de sus miembros, apresados en el lugar de los hechos, reconocieron cometer un atraco diariamente a transeúntes que pasaban por su banqueta para obtener el dinero con el que compraban sus drogas.¹⁸⁸

De entre todas las CEP, las Casas de los tabasqueños y la Casa de los sinaloenses merecen mención aparte por los conflictos que ocasionaron y por su elevado índice delictivo. En efecto, las Casas del Estudiante Tabasqueño tuvieron una participación más notoria que otras CEP debido a la injerencia directa del gobierno de su estado sobre sus residentes, en un evidente manejo político que a la postre generó diversos inconvenientes. El 30 de abril de 1976 en la Casa ubicada en la calle Sur núm. 105, colonia Héroes de Churubusco, un grupo de 40 estudiantes armados con pistolas, cuchillos y varillas causaron destrozos en el inmueble. En la nota periodística se sugiere que se trató de “diferencias políticas”.¹⁸⁹

¹⁸⁶ Como ejemplo de ello está el ataque citado de un grupo de pandilleros de la colonia Santa María la Ribera hacia un grupo de habitantes de la Casa del Estudiante Chiapaneco, localizada en la misma zona. *Vid.* nota 136.

¹⁸⁷ En distintas charlas que he sostenido con habitantes de la colonia Santa María la Ribera son comunes las referencias al temor que en ellos infundían los miembros de la Casa de los sinaloenses y los de la Casa de los duranguenses.

¹⁸⁸ *S/a*, (29/3/1978). "La Casa de Estudiantes de Sonora convertida en nido de pandilleros". *Avance*. p. 12.

¹⁸⁹ *S/a*, (30/4/1976). "Daños por 50 mil pesos en la Casa del Estudiante Tabasqueño". *Avance*. p. 12.

El 13 de septiembre del mismo año se habla de un grave enfrentamiento en la Casa de los tabasqueños localizada en Poniente núm. 106 y Norte 1-J, colonia Defensores de la República. Fue necesaria la intervención de agentes de la DIPD, así como cerca de 20 patrullas y varias ambulancias que acudieron al lugar luego de que algunas personas resultaran heridas (dos de ellas con impacto de bala). La riña interna tuvo lugar entre miembros de distintas Facultades, al parecer como venganza por el alumno herido en CU. Se reportó la aprehensión de 29 involucrados.¹⁹⁰

La injerencia política que influyó en el comportamiento de los habitantes de las Casas de los tabasqueños fue un tema que trascendió el ámbito capitalino. La prensa del estado de Tabasco se mostró especialmente preocupada por los actos de sus paisanos en el Distrito Federal, en lo que a todas luces se presentó como un conflicto político cuya finalidad era desprestigiar a la oposición. Belisario Colorado Jr., colaborador del diario *Avance* en Tabasco, satanizó a las CEP en un discurso cargado de recriminaciones: “en una supuesta Casa del Estudiante Tabasqueño de la ciudad de México, se armó la enésima balacera y falleció una mujer que pasaba por la calle”.¹⁹¹ El periodista introdujo en la polémica las declaraciones hechas por el entonces gobernador del estado de Tabasco, el licenciado Mario Trujillo García, quien había señalado que su gobierno no sostenía a ninguna Casa en el Distrito Federal; y, para exhibirlo de cierto modo, Belisario Colorado Jr. le exigió públicamente al mandatario que se pronunciara en contra de esos actos de barbarie y que eximiera de culpa a todo el pueblo tabasqueño.

Asociado con dicha información, Lucía Ramírez Corona —también colaboradora de *Avance*— ofreció una serie de datos que ayudan a dilucidar en buena medida el proceder delictivo de las Casas de los tabasqueños. La nota corresponde al día

¹⁹⁰ S/a, (13/9/1976). “Fenomenal bronca en la Casa del Estudiante Tabasqueño; 29 presos”. *Avance*. p. 12. Al parecer durante esos años no eran tan extraños los actos de violencia en CU, se puede apreciar más de un caso de herido de bala e incluso personas asesinadas dentro del recinto universitario. La mayoría por disputas por el poder y por problemas con narcóticos.

¹⁹¹ Belisario Colorado Jr., (12/10/1976). “Infamias de lesa humanidad”. *Avance*. p. 4.

13 de marzo de 1977, en la que aparece una denuncia realizada por estudiantes de la Casa de Sonora, quienes se quejan de las agresiones cometidas por un grupo de porros dirigidos por Gaspar Córdova Hernández, ya detenido en el reclusorio al momento del reportaje. A él se le atribuyó el ataque a otras tres Casas en lo que iba del año. Uno de los denunciantes sostenía que el grupo de porros agresor era manejado por el ya entonces ex gobernador de Tabasco, Mario Trujillo (1970-1976), quien siempre se mostró en contra de las CEP por los fines políticos que las conducían. Los denunciantes también aseguraron que durante el régimen de Trujillo se crearon grupos de choque para desprestigiar a dichas organizaciones, la que sin duda es una de las acusaciones más contundentes y reveladoras.¹⁹²

En una última nota relacionada con el estado de Tabasco, nuevamente Belisario Colorado Jr. se refiere a las CEP como “entes repudiables” y aplaude la decisión de cerrarlas: “Otra lección: hasta ahora, después de casi 30 años hubo otro presidente con el valor de Ruiz Cortines para acabar con esas crías de cuervos llamadas Casas de Estudiantes. Pobre México, aprende pero tras mucho sufrir”.¹⁹³

Si bien el carácter delictivo y la polémica que envolvió a las Casas de los tabasqueños fueron notorios, la Casa del Estudiante Sinaloense, ubicada en la calle de Ciprés núm. 143, en la colonia Santa María la Ribera, fue la que contó con mayor peso entre las CEP y con peor reputación entre los vecinos de la zona. Estaba habitada por 150 estudiantes internos y 300 externos. Se benefició del respaldo de Juan de Dios Bátiz, importante figura política y uno de los fundadores del IPN, y aunque no se sugiere un manejo ventajoso de la Casa por parte del funcionario sinaloense, sí fueron notorias las concesiones que disfrutaron sus inquilinos.¹⁹⁴ Aprovechándose del elevado número de sus integrantes los

¹⁹² Lucía Ramírez Corona, (13/3/1977). “Porros atacan a Casas de Estudiantes”. *Avance*. p. 5.

¹⁹³ Belisario Colorado Jr., (21/4/1978). “Se sufre pero se aprende” (parte de otra nota). *Avance*. p.

4.

¹⁹⁴ Gómez León, *op. cit.*, p. 114.

sinaloenses actuaron violentamente, ganándose la fama de conflictivos en exceso. Así, a pesar de las quejas de sus residentes, el cierre de la Casa en 1979 estuvo plenamente justificado, de hecho, a partir del número de acusaciones que recayeron sobre los sinaloenses, podría decirse que la clausura no sólo estuvo bien fundamentada, sino que incluso tardaron más de lo debido en efectuarla.¹⁹⁵

Desde el 8 de febrero de 1974 se reportó la captura de uno de los miembros de una pandilla, que se sabía, residía en la Casa de los sinaloenses. El sujeto, de nombre Humberto, fue apresado luego de que él y otros compañeros entraran por la fuerza a una casa, robaran y vejaran a sus habitantes. El líder de la banda, apodado “el Che”, y el resto de sus integrantes seguían libres, por lo que continuaban siendo una amenaza constante para los vecinos de la colonia.¹⁹⁶ Llama la atención que, a pesar de saber que dicho grupo se alojaba en la Casa del Estudiante Sinaloense, las autoridades no tomaron medidas contundentes.

En esa misma línea, el 3 de enero de 1978 se presentó una noticia sensacionalista en la que se reportó que, tras recibir una llamada de apoyo para perseguir a ocho sujetos armados, un helicóptero perdió el control y se desplomó. Los individuos fueron capturados finalmente en la Casa del Estudiante Sinaloense y se les acusó, según los informes del seguimiento de la noticia,¹⁹⁷ de balacear al helicóptero y provocar su caída.¹⁹⁸ El 28 de diciembre de 1978 se reportó que dicha Casa se había transformado en una guarida de asaltantes y que poseía en su interior una importante cantidad de armas y estupefacientes.¹⁹⁹ Finalmente, el día 15 de noviembre de 1979, con el pretexto de la delincuencia, real pero no nueva, se efectuó un operativo para desalojar a los estudiantes de la Casa de los

¹⁹⁵ Véase nota 168, p. 67.

¹⁹⁶ S/a, (8/2/1974). “Pandillero capturado”. *Avance*. p. 8.

¹⁹⁷ Se dio continuidad a la noticia los días 4 y 9 de enero de 1978 en el diario *Avance*.

¹⁹⁸ S/a, (3/1/1978). “Se desplomó un helicóptero”. *Avance*. p. 6.

¹⁹⁹ Marco Antonio Vega, (28/12/1978). “Subsisten casas de estudiantes con aportación de ellos mismos”. *Avance*. p. 9. Relacionado con el tema de los estupefacientes, en una charla que sostuve con un ex habitante anónimo de la Casa del Estudiante Sinaloense, me aseguró que él y otros miembros iban periódicamente a unas oficinas del estado de Sinaloa para abastecerse de drogas. Supuestamente, me comentó, las drogas eran la “moneda de cambio” que empleaba el gobierno para hacerse del servicio de la Casa.

sinaloenses. Hubo 20 detenidos de entre 18 y 24 años de edad y se decomisaron explosivos, armas, bombas molotov, cuchillos, drogas; también se encontraron restos humanos en el interior del inmueble.²⁰⁰

¿Cuáles fueron los factores que motivaron el cierre de la Casa de Sinaloa? Por un lado, la delincuencia generada por los sinaloenses dentro de una colonia con un alto índice de criminalidad, como lo era la Santa María la Ribera, se convirtió en un riesgo constante para los vecinos. Por otra parte, la crisis del subsidio de las CEP provocada por las becas individuales se encontraba en su punto más álgido. Y por último, el fallecimiento de uno de los “protectores” de la Casa, Juan de Dios Bátiz, unos meses antes de la toma del local.

Sin duda, todo ello condujo hacia el fin de la Casa del Estudiante Sinaloense, aunque no sería la única que corrió con esa suerte. Paulatinamente las CEP se ganaron la desaprobación de la población debido a la delincuencia que en ellas se generaba y a la propaganda desplegada en su contra por algunas publicaciones sensacionalistas. Esta desaprobación se conjugó con las intenciones del gobierno y creó el caldo de cultivo perfecto para el desprestigio de las Casas y su futura extinción.

La opinión pública influida por la prensa fue testigo del comportamiento violento de los estudiantes; una violencia que evidentemente contrastó con el interés del régimen por mantener el orden. Aunque acorde con su discurso, las autoridades intervenían cuando la situación se encontraba fuera de control y prácticamente porque los “revoltosos” no dejaban otra alternativa, pero en todo momento mostrándose como un gobierno conciliador. Prueba de ello es el discurso del ex Procurador General de Justicia del Distrito Federal, el licenciado Agustín Alanís Fuentes, que se dirigió a un grupo de 80 jóvenes el 22 de noviembre de 1977; entre los asistentes había varios líderes de las CEP a los que propuso sumar

²⁰⁰ S/a, (16/11/1979). “Desalojan Casa del Estudiante Sinaloense en México; decomisan armas y hallan osamentas”. *El Porvenir*.

esfuerzos para detener a los porros. Se comprometió a atender los problemas de las Casas e invitó a sus habitantes a denunciar a quienes las desvirtuaran. También hizo un llamado a los estudiantes para que ya no se manifestaran en las calles puesto que estando fuera no podrían vigilar las Casas (argumento risible), y culminó, cual político, señalando que “juntos y con valentía terminarán con el porrismo en México”.²⁰¹

¿Albergues de estudiantes o refugios de delincuentes? Las CEP fueron un proyecto vinculado al desarrollo educativo del país que frecuentemente se convirtieron en espacios de acción para grupos delictivos, ligados o no al Estado. Sería un error generalizar, pese a que existieron tendencias, no todas las Casas fueron nidos de delincuentes ni todos sus habitantes criminales potenciales.

²⁰¹ Ernesto Lara, (22/11/1977). “Las Casas de Estudiantes deben ser centros de convivencia, no refugios de delincuentes: Alanís”. *Avance*. p. 12.

Conclusiones

A comienzos de los años ochenta el Estado terminó por imponer sus condiciones a las Casas de Estudiantes de Provincia. Éstas enfrentaron un proceso de gradual desaparición que evidenció la eficacia de los mecanismos de control gubernamental. Durante la segunda mitad del siglo XX llegaron a existir más de 100 Casas en el Distrito Federal; sin embargo, a raíz de la imposición de la beca individual —en el año de 1977— el gobierno logró mermar su existencia y en la actualidad existen alrededor de cinco CEP. Si la beca individual fue o no tan sólo un pretexto para cerrar las Casas, lo cierto es que sus habitantes concedieron más de un motivo para justificar el proceder de las autoridades.²⁰² De hecho, habrá más de una persona que opine que las medidas fueron aplicadas tardíamente, ya cuando el daño de las CEP al entorno social era mayor que su aporte.

Acorde con las fuentes revisadas, las cuestiones académicas concernientes a los habitantes de las Casas estuvieron relegadas y no se presentaron como un tema de interés ni de difusión. La propaganda se centró en las movilizaciones y en la violencia que se desató en el interior de las mismas; violencia que da cuenta de la inestabilidad social que se vivía en algunas zonas de la ciudad de México durante los años setenta, en medio de un ambiente con elevados índices de criminalidad del que los habitantes de las CEP fueron partícipes. Por ello, no resulta extraño que los miembros de las Casas se enfrentaran a otros grupos estudiantiles, a las autoridades o incluso a los vecinos de la colonia.

Más allá del supuesto carácter delictivo de las CEP, llama la atención la ausencia de notas periodísticas “positivas”. A saber, la mención de un logro académico de algún miembro de las Casas; el reconocimiento de la organización y del

²⁰² A propósito de este tema, un habitante actual de la Casa del Estudiante Duranguense me comentó que sus familiares (padre y tíos), residentes de la Casa en aquel entonces, se opusieron en todo momento a la aceptación de la beca individual, situación que les acarreó severos problemas económicos pero que permitió que la Casa continuara en servicio. Desconozco en qué grado la postura de sus habitantes fue factor para mantenerla funcionando hasta nuestros días, pero sin duda en algo debió influir.

comportamiento de algunas de ellas; o el elogio de la conciencia y participación política de un sector de sus habitantes, lo cual incluso era mal visto por considerar al proselitismo ajeno a sus funciones estudiantiles. En todo caso, las noticias sobre las CEP se limitaban a exhibir las conductas reprobables de sus residentes o, de ser el caso, a resaltar el apoyo del Estado a la educación, un apoyo que las más de las veces consistía en un acto demagógico; la donación monetaria de algún político que no resolvía los problemas de las Casas pero que vendía la imagen de un gobierno preocupado por sus necesidades.

Cabe destacar el hecho de que las autoridades se valieran de dichos grupos para desestabilizar o simplemente desprestigiar a las facciones políticas opositoras. Ello justifica en buena medida las concesiones que el Estado les otorgó durante buena parte de la década de los setenta, a pesar de que en más de una Casa la delincuencia se encontraba fuera de control. Del mismo modo, algunas CEP se convirtieron en el último reducto de los gobiernos estatales en la capital del país, una especie de trinchera política encargada de realizar el “trabajo sucio”. Así, la existencia de grupos porriles dentro de las Casas demuestra que se trató de espacios de acción múltiple que respondieron a diversas finalidades.

A la larga, los conflictos de intereses, las luchas por el poder y, en cierta forma, la autonomía que comenzaron a ganar las CEP dificultaron su manejo e impulsaron al gobierno a actuar en su contra. Situación que podría parecer contradictoria si se piensa, como señalé, que en ocasiones el Estado fomentó y obtuvo ventaja de los grupos de choque gestados en el interior de las Casas. Fue hasta que las autoridades perdieron el control sobre las CEP —entre otros factores— cuando se pusieron en duda los beneficios de la existencia de las mismas y se dio inicio al uso de medidas coercitivas.

El Estado, a través del tiempo, ha encontrado la manera de solventar las pugnas de la oposición, así ocurrió con las huelgas de obreros, de maestros y de campesinos e incluso con las guerrillas. Los movimientos estudiantiles no fueron

la excepción y los miembros de las CEP no consiguieron solucionar los problemas que los aquejaban con las manifestaciones. De hecho, la relativa tolerancia de las marchas y mítines por parte del gobierno contrasta con la ausencia de soluciones para las demandas estudiantiles. Bajo una dinámica que negaba el diálogo con los altos funcionarios o, en su defecto, que se quedaba en una lista de promesas sin cumplir o en la postergación de una respuesta que poco o nada resolvía con su llegada.

No obstante, sería erróneo desacreditar la capacidad de organización y el poder de convocatoria que desplegaron las CEP durante el período estudiado, incluso llegaron a dar muestras de madurez política con el reconocimiento y apoyo de causas ajenas a las suyas, buscando a toda costa la obtención de la tan anhelada unidad, bastión de las luchas populares. Cabe destacar la participación política de los estudiantes de las Casas, más allá de que en ocasiones tuvieran intereses encontrados o estuvieran afiliados a organizaciones antagónicas, no debe desestimarse la postura resuelta que adoptaron ante las eventualidades que pusieron en riesgo su estructura.

No está de más mencionar que en todo momento busqué evitar los juicios maniqueos y no abusar de los estereotipos, en el entendido de que ambos pueden implicar la simplificación de los conceptos y de las categorías. Ni todos los habitantes de las CEP se dedicaron a delinquir, ni todos los estudiantes fueron luchadores sociales. El lector juzgará y será también él quien se encargue de calificar la postura del estudiantado y del gobierno. Consciente de que podría ahondarse en algunas cuestiones —tal vez objeto de otra investigación— considero que tanto la ideología, la conciencia política y el activismo de los estudiantes, así como la criminalidad en la ciudad de México y el uso de grupos de choque por parte del gobierno, son temas vigentes que analizados en retrospectiva pueden arrojar valiosos resultados. Temas que, si bien no permanecen en el olvido, tampoco han sido abordados en todas sus dimensiones.

En síntesis, las CEP fueron instituciones impulsadas como parte de un proyecto que el tiempo, las circunstancias y sus participantes terminarían desvirtuando. Lo que en un principio eran espacios pensados para impulsar el desarrollo académico de quienes vivían en el interior de la república, se convirtieron en escenarios que dieron cabida a diversas conductas que respondían a intereses variados, ajenos, en ocasiones, a su función más elemental y perjudiciales, en menor o mayor medida, para el gobierno y la sociedad. Así, durante buena parte de los años setenta, las Casas de Estudiantes de Provincia se transformaron en “lobos con piel de oveja”.

Archivos consultados

Archivo General de la Nación

Archivo Histórico del Distrito Federal

Hemeroteca Nacional de México

Avance, el diario de la capital

El Porvenir

El Universal

Bibliografía

Alejo, Francisco Javier, “La política fiscal en el desarrollo económico de México”, en Wionczek, Miguel (comp.), *La sociedad mexicana: presente y futuro*. México, Fondo de Cultura Económica, 3ª ed., 1979, pp. 56-97.

Barkin, David, “La persistencia de la pobreza en México: un análisis económico estructural”, en Wionczek, Miguel (comp.), *La sociedad mexicana: presente y futuro*. México, Fondo de Cultura Económica, 3ª ed., 1979, pp. 186-207.

Bobbio, Norberto, *Diccionario de política*, México, Siglo XXI, 11ª ed., 1998, 2 vols.

Careaga, Gabriel, *Biografía de un joven de la clase media*. México, Cal y arena editores, 1987, 180 pp.

Carr, Barry, *La izquierda mexicana a través del siglo XX*. México, Editorial Era, 1996, 423 pp.

Cervera Velasco, María Guadalupe, *Centro cultural y residencia para extranjeros: Casa Nacional del Estudiante*. México, Tesis UNAM, 2001, 50 pp., ils.

Cohen, Deborah y Jo Frazier, Lessie, “‘No sólo cocinábamos...’ Historia inédita de la otra mitad del 68”, en Semo, Ilan *et al.*, *La transición interrumpida: México 1968-1988*. México, Nueva Imagen, 1993, pp. 75-109.

Davis, Diane, *El leviatán urbano. La ciudad de México en el siglo XX*. México, Fondo de Cultura Económica, 1999, 530 pp.

Garza Villarreal, Gustavo, *La urbanización de México en el siglo XX*. México, Colegio de México, 2003, 208 pp.

_____, *El proceso de industrialización en la ciudad de México, 1821-1970*. México, Colegio de México, 1985, 446 pp.

Gilman, Claudia, *Entre la pluma y el fusil: debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2003, 432 pp.

González Casanova, Pablo y Florescano, Enrique (coords.), *México hoy*. México, Siglo XXI, 3ª ed., 1979, 422 pp.

Gracida, Elsa M. "La leyenda negra de los años setenta", en Romero Sotelo, María Eugenia (coord.), *Fundamentos de la política económica en México: 1910-2010*. México, 2012, pp. 333-417.

Hansen, Roger, *La política del desarrollo mexicano*, México, Siglo XXI, 25ª ed. 2004, 340 pp.

Huacuja, Mario y Woldenberg, José, *Estado y lucha política en el México actual*. México, Ediciones El caballito, 1976, 282 pp.

Knight, Alan, *Repensar la Revolución Mexicana*. México, Colegio México, 2013, vol. 1.

Loaeza, Soledad, *Clases medias y política en México*. México, Colegio México, 1988, 428 pp.

López Cámara, Francisco, *El desafío de la clase media*. México, Editorial Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1971, 106 pp.

Medina Peña, Luis, *Civilismo y modernización del autoritarismo. 1940-1952*. México, El Colegio México, 1979, 206 pp.

_____, *Hacia el nuevo Estado. México, 1920-1994*. México, Fondo de Cultura Económica, 1995, 338 pp.

Monsiváis, Carlos, "'En virtud de las facultades que me han sido otorgadas...'. Notas sobre el presidencialismo a partir de 1968", en Ilan Semo et al., *La transición interrumpida: México 1968-1988*, México, Nueva Imagen, 1993, pp. 113-125.

Navarrete, Jorge Eduardo, "Desequilibrio y dependencia: las relaciones económicas internacionales de México en los años setenta", en Wionczek, Miguel (comp.), *La sociedad mexicana: presente y futuro*. México, Fondo de Cultura Económica, 3ª ed., 1979, pp. 98-134.

Pellicer, Olga y Reyna, José Luis, *El afianzamiento de la estabilidad política. 1952-1960*. México, El Colegio México, 1978, 222 pp., ils.

Ramírez, Ramón, *El movimiento estudiantil de México: julio/diciembre de 1968*, México, Era, 2008, 2 vols.

Rodríguez Kuri, Ariel, “El lado oscuro de la luna. El momento conservador en 1968”, en *Conservadurismo y derechas en la historia de México*. Tomo II. Erika Pani (coord.), México, Fondo de Cultura Económica y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2009, pp. 512-559.

Romero Sotelo, María Eugenia (coord.), *Fundamentos de la política económica en México: 1910-2010*. México, 2012, 532 pp., ils.

Romero Sotelo, María Eugenia, “La retórica de la economía 1958-1970: del desarrollo equilibrado el desarrollo estabilizador”, en Romero Sotelo, María Eugenia (coord.), *Fundamentos de la política económica en México: 1910-2010*. México, 2012, pp. 237-331.

Saucedo Bonilla, Leonardo, *La Casa del Estudiante Duranguense en la ciudad de México*, manuscrito inédito, 2014, 54 pp., ils.

Semo, Enrique, “La izquierda vis-à-vis”, en Semo, Ilan et al., *La transición interrumpida: México 1968-1988*. México, Nueva Imagen, 1993, pp. 127-142.

Tello, Carlos, “Un intento de análisis de la distribución personal del ingreso”, en Wionczek, Miguel (comp.), *La sociedad mexicana: presente y futuro*. México, Fondo de Cultura Económica, 3ª ed., 1979, pp. 208-237.

Wionczek, Miguel (comp.), *La sociedad mexicana: presente y futuro*. México, Fondo de Cultura Económica, 3ª ed., 1979, 458 pp.

Wionczek, Miguel, “La inversión extranjera privada: problemas y perspectivas”, en Wionczek, Miguel (comp.), *La sociedad mexicana: presente y futuro*. México, Fondo de Cultura Económica, 3ª ed., 1979, pp. 135-157.

Tesis

Jiménez Guzmán, Héctor, (2011). *El 68 y sus rutas de interpretación: una crítica historiográfica*. Tesis de Maestría, UAM Azcapotzalco, 240 pp.

Páginas de internet:

De la Rosa, Gustavo, “Así nunca vamos a regresar al primer mundo”, en *sinembargo.mx*, [en línea], secc. opinión, México, 1 de abril, 2014. <[http://www/sinembargo.mx/opinion/01-04-2014/22826](http://www.sinembargo.mx/opinion/01-04-2014/22826)>. [Consulta: 22 de octubre, 2014.]

Gómez León, Amir, “Vida de Estudiantes”, [en línea] México, CONECULTA, 2008, 156 pp. <http://conecultachiapas.gob.mx/publicaciones/descargas/vida_de_estudiantes.pdf>. [Consulta: 8 de abril de 2015.]

González de Alba, Luis, “1968: La fiesta y la tragedia”, [en línea] México, Nexos, 1993, <<http://historico.nexos.com.mx/articuloEspecial.php?id=3764>> [Consulta: 3 de diciembre de 2015.]

Lara Sáenz, Leonardo “La educación pública superior en México (Panorama actual y perspectivas)”, en *biblio.juridicas.unam.mx* [en línea], México, PDF, 23 pp. <<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/742/3.pdf>>. [Consulta: 22 de septiembre de 2015.]

Tabla de siglas y abreviaturas:

ANCE	Asociación Nacional de Casas de Estudiantes
CEP	Casas de Estudiantes de Provincia
CNC	Confederación Nacional Campesina
CNCEP	Consejo Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia
CROM	Confederación Regional Obrera Mexicana
CTM	Confederación de Trabajadores de México
DGPYT	Dirección General de Policía y Tránsito
FICEM	Frente Integrador de Casas de Estudiantes de México
FNCEP	Frente Nacional de Casas de Estudiantes de Provincia
IPS	Investigaciones Políticas y Sociales
MRM	Movimiento Revolucionario del Magisterio
PCM	Partido Comunista Mexicano
PRT	Partido Revolucionario de los Trabajadores
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
STFRM	Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana